



Disability Rights Now 2019

(Derechos de las personas con discapacidad en la actualidad 2019)

Informe Paralelo de la Sociedad Civil Australiana
relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad:
Revisión de la CRPD de las Naciones Unidas de 2019

En respuesta a la Lista de temas previa a la presentación de los segundos y
terceros informes periódicos combinados de Australia [CRPD/C/AUS/QPR/2-3]



Recopilado por las Organizaciones Australianas para Personas con Discapacidad (DPO), Organizaciones de Representantes de Personas con Discapacidad (DRO) y Organizaciones de Defensa de las Personas con Discapacidad



Publicación de la información

Informe Paralelo de la Sociedad Civil Australiana relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2019) en respuesta a la Lista de temas previa a la presentación de los segundos y terceros informes periódicos combinados de Australia [CRPD/C/AUS/QPR/2-3]. Recopilado por el Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil Australiana, julio de 2019.

Descargo de responsabilidad

Los puntos de vista y las opiniones expresadas en esta publicación son las del Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil y no necesariamente de nuestros respectivos organismos de financiación. Se han tomado todos los recaudos posibles al preparar la información contenida en este documento. El Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil renuncia a toda responsabilidad por la imprecisión o la insuficiencia de la información, y bajo ninguna circunstancia será responsable de descuido o de cualquier otra situación que surja de la elaboración o del suministro de cualquier información mencionada anteriormente.

© 2019

Datos de la imagen del trabajo artístico de la portada:

© “Two Spirit Yarning” por Paul Constable Calcott del pueblo Wiradjuri. Paul utiliza el arte y los símbolos tradicionales de sus ancestros para hablar sobre temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+ (dos espíritus), las personas con discapacidad en las Primeras Naciones de la Australia remota y urbana.

Acerca de este informe

El presente Informe Paralelo de la Sociedad Civil relativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) ofrece la perspectiva de las personas con discapacidad con respecto al cumplimiento por parte de Australia de sus obligaciones en virtud de dicha Convención.

Este Informe responde a la Lista de temas previa a la presentación de los segundos y terceros informes periódicos combinados de Australia [CRPD/C/AUS/QPR/2-3] del Comité de la CRPD. También brinda información en virtud de los artículos 10, 20 y 23, que no formaban parte de la Lista de temas previa a la información (LOIPR). La numeración del Informe, en cada artículo, corresponde a la LOIPR pertinente.

Después de un Taller de Información Paralela de la CRPD llevado a cabo en noviembre de 2017, se estableció un Grupo de Trabajo CRPD de la Sociedad Civil Australiana (el Grupo de Trabajo) para ayudar a preparar la Revisión de Australia de la CRPD de las Naciones Unidas. Al elaborar este Informe Paralelo, el Grupo de Trabajo realizó consultas específicas con las personas con discapacidad y con sus organizaciones de defensa, y analizó las pruebas recabadas de investigaciones iniciadas por el gobierno y la sociedad civil, y de diversos informes y presentaciones.

En el primer semestre de 2019, el Grupo de Trabajo realizó una encuesta en línea para las personas con discapacidad con el objeto de tener una posibilidad más para contribuir a la elaboración de este Informe. Más de 1000 personas con discapacidad respondieron a esta encuesta y los hallazgos se han incorporado al Informe.

El Grupo de Trabajo está compuesto por los representantes de las DPO, las organizaciones de representantes de personas con discapacidad y las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad:

- [Disabled People's Organisations Australia \(DPO Australia\)](#): Organizaciones Australianas para Personas con Discapacidad¹
- [Council for Intellectual Disability NSW \(CID\)](#): Consejo para las Personas con Discapacidad Intelectual de NSW
- [Queensland Advocacy Incorporated \(QAI\)](#): organización para la defensa de las personas con discapacidad de Queensland
- [Advocacy for Inclusion \(AFI\)](#): defensa para la inclusión
- [Disability Advocacy Network Australia \(DANA\)](#): Red para la defensa de las personas con discapacidad
- [Australian Centre for Disability Law \(ACDL\)](#): Centro Australiano de Derecho en materia de Discapacidad
- [Queensland Voice for Mental Health \(QVMH\)](#): voz para la salud mental de Queensland
- [Children and Young People with Disability Australia \(CYDA\)](#): Niños y jóvenes con discapacidad de Australia
- [Australian Federation of Disability Organisations \(AFDO\)](#): Federación Australiana de Organizaciones para Personas con Discapacidad

Cantidad de palabras de este Informe:

Conforme a las Directrices sobre la participación de las organizaciones de personas con discapacidad (DPO) y a las organizaciones de la sociedad civil en los trabajos del Comité [UN Doc CRPD/C/11/2], la cantidad de palabras de este informe es de 9850.

¹ [Las Organizaciones Australianas para Personas con Discapacidad \(DPO Australia\)](#) son una alianza de cuatro organizaciones para personas con discapacidad, con discapacidad cruzada, específicas para la población, que se desempeñan a nivel nacional en Australia. DPO Australia fue fundada y está compuesta por: [Women With Disabilities Australia \(WWDA\)](#) (Mujeres con discapacidad de Australia); [First Peoples Disability Network Australia \(FPDNA\)](#) (Primera red de personas con discapacidad de Australia); [People with Disability Australia \(PWDA\)](#) (Personas con discapacidad de Australia); y [National Ethnic Disability Alliance \(NEDA\)](#) (Alianza nacional para las personas étnicas con discapacidad. Como DPO, estas cuatro organizaciones nacionales son organizaciones autodeterminadas conducidas, controladas y constituidas por personas con discapacidad.

Contenido

Publicación de la información.....	2
Acerca de este informe	3
Agradecimientos.....	6
Adhesiones.....	7
Resumen.....	10
Objetivo y obligaciones generales (artículos 1-4)	12
Igualdad y no discriminación (artículo 5)	15
Mujeres con discapacidad (artículo 6).....	16
Niños(as) con discapacidad (artículo 7)	18
Generar conciencia (artículo 8).....	19
Accesibilidad (artículo 9).....	20
Derecho a la vida (artículo 10)	21
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (artículo 11).....	22
Igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12).....	23
Acceso a la justicia (artículo 13).....	24
Libertad y seguridad de la persona (artículo 14)	26
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15)	27
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (artículo 16).....	28
Integridad de las personas (artículo 17).....	29
Libertad de desplazamiento y nacionalidad (artículo 18).....	30
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19).....	31
Movilidad personal (artículo 20).....	32
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (artículo 21)	33
Respeto del hogar y de la familia (artículo 23).....	34
Educación (artículo 24).....	35

Salud (artículo 25).....	36
Acceso a la habilitación y rehabilitación (artículo 26).....	37
Derecho al trabajo (artículo 27).....	38
Nivel de vida adecuado y protección social (artículo 28).....	39
Participación en la vida política y pública (artículo 29)	40
Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31)	41
Cooperación internacional (artículo 32).....	42
Aplicación y supervisión nacional (artículo 33).....	43
Referencias y notas	44

Agradecimientos

El Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil Australiana agradece a los dueños tradicionales de las tierras sobre las cuales se elabora esta publicación. Reconocemos la profunda conexión espiritual con esta tierra del pueblo aborígen y del Estrecho de Torres. Extendemos nuestro respeto a los miembros de la comunidad y a los ancianos del pasado, del presente y del futuro.

El Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil Australiana reconoce y agradece a Carolyn Frohmader, que elaboró el proyecto del presente Informe para y en nombre del Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil, y a Therese Sands por editarlo y corregirlo, y por coordinar los preparativos de la sociedad civil para la revisión de Australia de la CRPD de las Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil.

El Grupo de Trabajo también agradece al Gobierno de Australia, al Departamento de la Fiscalía General y a PwC Australia por su apoyo para elaborar este Informe.

El Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil Australiana también reconoce y agradece a las personas con discapacidad que completaron la Encuesta Nacional de la CRPD (2019) que ayudó a elaborar este Informe.

Adhesiones

The following organisations and individuals have endorsed this report in whole or in part.

Organisations

ACT Council of Social Service (ACTCOSS)

Advocacy for Inclusion

All Means All

Australian Centre for Disability Law

Australian Council of Social Service (ACOSS)

Australian Disability + Development Consortium

Australian Federation of Disability Organisations

Australian Network for Universal Housing Design

Australian Women Against Violence Alliance

Blind Citizens Australia

Brain Injury Matters

Canberra Community Law

Centre for Disability Research and Policy, University of Sydney

Children and Young People with Disability Australia

Children by Choice

Communication Rights Australia

Community Legal Centres NSW

Council for Intellectual Disability NSW

Deafblind Association (NSW) Inc

Deafness Forum of Australia

Disability Advocacy Network Australia

Disability Advocacy NSW

Disability Discrimination Legal Service

Disabled People's Organisations Australia

Disability Resource Centre

Domestic Violence NSW

Down Syndrome Australia

Elizabeth Evatt Community Legal Centre

Engender Equality

Equality Lawyers

Family Planning NSW

First Peoples Disability Network

Gold Coast Domestic Violence Prevention Centre

Immigration Advice and Rights Centre

Intellectual Disability Rights Service

Intersex Human Rights Australia

JFA Purple Orange

Kingsford Legal Centre
Macleod Accommodation Support Service Inc
Marie Stopes Australia
National Association of Community Legal Centres
National Council of Single Mothers & their Children
National Ethnic Disability Alliance
National Mental Health Consumer and Carer Forum (NMHCCF)
National Rural Women's Coalition Ltd
NSW Council of Social Service (NCOSS)
People with Disabilities ACT (PwDACT)
People with Disabilities WA
People with Disability Australia
Physical Disability Australia
Physical Disability Council of NSW
Public Interest Advocacy Centre Ltd
Queensland Advocacy Incorporated
Queensland Collective for Inclusive Education
Queensland Voice for Mental Health
Queenslanders with Disability Network Ltd
Rape & Domestic Violence Services Australia
Rights and Inclusion Australia
Rights in Action
Save the Children Australia
Sisters Inside
South West Sydney Legal Centre
Speak Out Advocacy
Speaking Up For You inc. (SUFY)
Sussex Street Community Law Service
Sydney Queer and Disability Community
Tasmanian Council of Social Service (TasCOSS)
Tenants Union of NSW
The Foundation for Independence Recreation & Social Training Inc
The Institute for Advocacy and Leadership Development
University of Sydney's Disability Action Plan Consultative Committee
Victorian Mental Illness Awareness Council
Villamanta Disability Rights Legal Service Inc.
WA Council of Social Service (WACOSS)
Wagga Women's Health Centre
Welfare Rights Centre
WESNET
Women with Disabilities Australia

Women With Disabilities ACT

Women with Disabilities Victoria

Women's Legal Service NSW

Women's Legal Services Australia

Women's Safety NSW

Individuals

Heidi La Paglia

Dr Joseph Naimo

Dr James M. Cregan

Dr Joan Beckwith (PhD)

Ken Steele OAM, Chair Consumer and Carer Mental Health Advisory Council

Emeritus Professor Odwyn Jones AO

Lyn Mahboub

Sue Boyce, former Chair of the Senate Standing Committee for Community Affairs (2013-2014)

Dr Suzanne Covich (PhD)

Greg Lynn

Professor Jaya Dantas, President of Australian Graduate Women and Graduate Women Western Australia

Dr Raelene West, RMIT University Social Researcher

Dr Christina David, RMIT University Social Researcher

Dr Sue Olney, UNSW Canberra, School of Business - Research Fellow, Public Service Research Group

Jenny Malone, RMIT University PhD candidate

Monica O'Dwyer, RMIT University PhD candidate

Stephanie Gotlib

Wendy Taylor, RMIT University Industry fellow

Elizabeth Hudson, RMIT University PhD candidate

Wendy Taylor - RMIT University Industry fellow

Elizabeth Hudson – RMIT University PhD Candidate

Resumen

El Grupo de Trabajo del Informe Paralelo CRPD de la Sociedad Civil Australiana (el Grupo de Trabajo) preparó este Informe Paralelo para brindar los puntos de vista de las personas con discapacidad al Comité de la CRPD.

Australia es un país rico y muchos australianos gozan de derechos humanos y de alto nivel de vida. Por lo tanto, Australia debería atenerse a los más altos estándares con respecto a sus obligaciones para con la CRPD.

El Grupo de Trabajo reconoce las reformas positivas que Australia inició desde su primera revisión en 2013, en particular, con la implementación del Programa Nacional de Seguro por Discapacidad (NDIS) y el establecimiento de una Comisión Real respecto de la Explotación, Violencia y Abuso de Personas con Discapacidad.

Sin embargo, las personas con discapacidad aún sufren pobreza, desventajas y violaciones a los derechos humanos; y esto es especialmente grave para las personas² y comunidades indígenas. En particular, este Informe llama la atención a las cuestiones críticas que necesitan que Australia:

- retire sus Declaraciones Interpretativas relativas a los artículos 12, 17 y 18, que impiden la reforma y permiten las violaciones a los derechos humanos que incluyen la denegación de la capacidad jurídica, los tratamientos forzosos y la discriminación contra las personas no australianas con discapacidad que tratan de ingresar o permanecer en Australia;
- fortalezca las leyes contra la discriminación para abordar la lucha contra la discriminación interseccional; permita realizar las quejas por medio de sus representantes; permita realizar quejas con respecto a los delitos de difamación por razones de discapacidad; y garantice que las personas con discapacidad puedan realizar quejas de manera eficaz sobre la denegación de un alojamiento razonable;
- elabore y promulgue legislación nacional sobre la prevención de todas las formas de violencia basadas en el género;
- incorpore los derechos de la CRPD a la legislación, la política y los programas que se aplican a los niños y a los jóvenes; y desarrolle mecanismos para garantizar que los niños y jóvenes con discapacidad puedan participar de consultas, procesos de tomas de decisiones y elaboración de políticas que afectan su vida;
- establezca un marco nacional para el cumplimiento obligatorio de las Normas sobre discapacidad para tener acceso al transporte público; las Normas sobre discapacidad (acceso a predios: edificios); y las Normas nacionales sobre los servicios de discapacidad; y que modifique el Código Nacional de Construcción para exigir las condiciones de acceso mínimo a todas las viviendas nuevas y a las sustancialmente modificadas;
- que aborde de manera urgente la representación desproporcionada de personas con discapacidad en el sistema de justicia penal y termine con el uso indebido de prisiones para el tratamiento de personas con discapacidad no condenadas;
- actúe para garantizar que la Auslan sea reconocida como lengua nacional y unifique las leyes para garantizar que las personas con discapacidad, que incluyen a las personas sordas, puedan formar parte de un jurado;
- establezca un marco nacional coherente para la protección de personas con discapacidad, desde la modificación de la conducta hasta la eliminación de prácticas represivas en una amplia gama de establecimientos;
- promulgue una legislación nacional uniforme y exigible que prohíba la esterilización y las intervenciones médicamente innecesarias de las personas con discapacidad y de las personas con variaciones intersexuales sin su consentimiento previo libre y completamente informado;

² En el contexto australiano, el término 'personas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres' o 'primeros habitantes' es la terminología aceptada para referirse a las personas indígenas. En consonancia con la terminología reconocida a nivel internacional, este Informe utiliza deliberadamente el término 'personas indígenas', si bien reconoce que en el contexto australiano, la terminología preferida es 'personas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres'.

- elabore un plan nacional para el cierre de entornos institucionales residenciales, y desarrolle opciones de apoyo y vivienda basadas en la comunidad para las personas con discapacidad;
- tome medidas urgentes sobre la discriminación contra padres con discapacidad, específicamente para abordar la alta tasa de niños que son separados de padres con discapacidad;
- formule un Plan de Acción para la Educación Inclusiva a nivel nacional que incluya un marco legislativo y político que cumpla absolutamente con el Artículo 24 y el Comentario General 4;
- desarrolle una estrategia de empleo nacional para personas con discapacidad que contenga medidas concretas en materia de género para incrementar la participación de la fuerza laboral de las personas con discapacidad y para que las personas hagan una transición desde los empleos segregados hacia los empleos más comunes, y tengan una remuneración equitativa por el trabajo;
- termine con las restricciones permanentes de elegibilidad para obtener la pensión por discapacidad (DSP) e incremente la tasa de asignación para complementar el salario (Newstart) para garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado;
- establezca un mecanismo formal para la participación productiva de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y en la aplicación y supervisión de la CRPD en consonancia con el Comentario General 7.

Respuesta a la Lista de Temas previa a la información (LOIPR)

Objetivo y obligaciones generales (artículos 1-4)

1. Aún no existe un marco legal integral para la protección de los derechos humanos en Australia. La CRPD aún no se ha incorporado completamente a la ley nacional. Si bien la *Ley contra la Discriminación por Discapacidad de 1992* (DDA)² y la legislación contra la discriminación basada en el Estado/Territorio incorporan algunos de los derechos en virtud de la CRPD,³ el alcance de los derechos protegidos y de los motivos de discriminación es mucho más limitado en Australia que el estipulado por la ley internacional sobre derechos humanos.⁴

Las Declaraciones Interpretativas de Australia sobre los Artículos 12, 17 y 18 de la CRPD restringen la implementación eficaz de la CRPD, evitan la reforma y permiten las violaciones a los derechos humanos que incluyen la denegación de la capacidad jurídica, los tratamientos forzados y la discriminación contra las personas no australianas con discapacidad que buscan ingresar o permanecer en Australia.⁵

2. No hay mecanismos permanentes o eficaces para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, que incluyen niños con discapacidad, en la aplicación y supervisión de la CRPD.⁶ Los gobiernos no comprenden bien la importante función de las DPO, en consonancia con el Comentario General 7. Los recursos para las DPO y para las organizaciones que representan a las personas con discapacidad (DRO) son competitivos, restringen la participación en las actividades de los derechos humanos internacionales y han sido reducidos desde el último período que abarca el informe.⁷

El *Programa Nacional para la Defensa de la Discapacidad (NDAP)*⁸ fue revisado en 2016, pero aún no se han implementado las reformas. Muchos gobiernos estatales y territoriales están reduciendo o dejando de financiar la defensa independiente de la discapacidad debido a la idea equivocada de que el *Programa Nacional de Seguro por Discapacidad (NDIS)*⁹ resolverá los temas de las personas con discapacidad. La financiación que queda es insuficiente para responder a los altos niveles de necesidad para la defensa de la discapacidad en todo el país.¹⁰ Las personas con discapacidad y las encuestas independientes¹¹ han recomendado que las jurisdicciones que hayan reducido o dejado de financiarla, restablezcan la financiación para la defensa.¹²

3. La *Estrategia Nacional para la Discapacidad 2010-2020 (NDS)*¹³ establece el marco político nacional para orientar a los gobiernos australianos para que cumplan con las obligaciones en virtud de la CRPD.¹⁴ En la actualidad, la NDS está en revisión para prepararse para su décimo año de vigencia, con miras a otro plan de diez años. Sin embargo, el *Plan de Implementación*¹⁵ final en virtud de la NDS aún no se ha publicado y solo hubo dos informes de seguimiento a pesar del compromiso con los informes de seguimiento bienales. Estos informes solo describen las acciones en lugar de evaluar los resultados para las personas con discapacidad. La NDS carece de acciones y resultados mensurables para abordar las violaciones sistémicas a los derechos humanos, carece de recursos para la aplicación, supervisión y evaluación en todas las áreas de resultados de la política, y carece de responsabilidad y de mecanismos de aplicación.¹⁶ Los datos desglosados y la recopilación de información sobre la situación de las mujeres y los niños con discapacidad no están incorporados en la NDS.¹⁷

La competencia con respecto a la política sobre discapacidad es de la NDS, que es independiente del Departamento de Servicios Sociales (DSS). Las DPO han urgido a los gobiernos australianos a establecer un mecanismo ejecutivo dentro del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete para garantizar el alto nivel y la coordinación entre el gobierno y la NDS.¹⁸ La presente recomendación fue secundada por una Encuesta del Senado¹⁹; sin embargo, el Gobierno la rechazó.²⁰

- 4(a) El objetivo del NDIS es ayudar a un 10 % o a 460 000 personas con discapacidad en Australia. Los criterios de evaluación²¹ para acceder al NDIS están estipulado en la Ley del NDIS de 2013 (Cth).²² A fines de 2018, 244 653 participantes del NDIS tenían un plan aprobado, cifra que está muy por debajo de los 315 721 participantes que se esperaba que tuvieran sus planes aprobados²³ para ese momento.²⁴

Hay una excesiva confianza en los diagnósticos médicos más que en las evaluaciones funcionales. El proceso de planificación para los participantes del NDIS es complejo y confuso y, a menudo, carece de claridad y transparencia.²⁵ A menudo, los participantes del Programa conocen sus derechos y opciones.²⁶ Las pruebas de las personas con discapacidad²⁷ demuestran que los planificadores han elaborado planes que no representan las necesidades de los participantes; ellos toman decisiones negativas para las cuales no están calificados; hay prologadas demoras para recibir los planes, para realizar las revisiones de los planes y para cualquier otra información del Organismo de Seguro Nacional por Discapacidad (NDIA); además, las revisiones de los planes provocaron reducciones innecesarias en la financiación del participante.²⁸

No todos los participantes elegibles se benefician del NDIS.²⁹ Las personas con discapacidad psicosocial, las personas indígenas con discapacidad, las personas de diversos orígenes culturales y lingüísticos (CALD) con discapacidad, las mujeres y los niños con discapacidad, las personas LGBTIQ+ con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual y aquellas personas de áreas remotas no solo tienen dificultades para acceder al Programa, sino que también corren mayor riesgo de tener resultados desfavorables.³⁰ Hay una cultura en el NDIA que no le da prioridad al participante del Programa.³¹ Hay cada vez más pruebas de que a los participantes del NDIS se les niegan los servicios y la atención debido a las disputas entre el NDIA y otros servicios gubernamentales.³²

Hay una clara desigualdad de género en el NDIS. En todas las jurisdicciones, el porcentaje de participantes femeninas sigue estando por debajo del 37 %.³³ Las DPO le reclaman al NDIS la elaboración de una Estrategia relativa al Género.

Las personas con discapacidad siguen preocupadas con respecto a la infrautilización del NDIS, y se espera que los pagos disminuyan en \$1600 millones en 2019-20, hecho atribuido por el Gobierno de que la transición de las personas del programa es más lenta que la esperada.³⁴ Las personas con discapacidad argumentan que la aceptación es más lenta que la prevista debido a los problemas que tienen las personas para acceder al programa y a los prolongados períodos de espera para que los participantes reciban apoyo; además argumentan que los fondos no gastados deberían utilizarse para subsanar los problemas de implementación del programa.³⁵

En la actualidad no hay una estrategia nacional clara para el crecimiento de la fuerza laboral a pesar de la necesidad de otros 70 000 trabajadores con discapacidad para 2020.³⁶

- 4(b) Las personas con discapacidad mayores de 65 años no son elegibles para el NDIS y dependen del sistema de asistencia para adultos mayores que no brinda igualdad de apoyo y que carece de experiencia con respecto al apoyo especializado relacionado con la discapacidad.³⁷

Los gobiernos están retirando su financiación para una serie de programas de apoyo para la salud mental y están utilizando esta financiación para compensar parte de su contribución al NDIS. En esta etapa, no queda claro qué ayuda estará disponible para las personas con discapacidad psicosocial que no cumplan con los criterios de elegibilidad del NDIS.³⁸

Dado que los programas de apoyo para la discapacidad están incluidos en el NDIS, es probable que las personas que utilizan estos servicios³⁹ y que no sean elegibles para el NDIS no reciban más apoyo. Si bien los Gobiernos de la *Commonwealth* y de los Estados/Territorios han acordado brindar continuidad de apoyo a través de los servicios para discapacidad que están por fuera del NDIS, en la práctica hay confusión e incertidumbre sobre qué servicios se seguirán ofreciendo o financiando.⁴⁰ Algunos apoyos para discapacidad no se brindan debido a que no quedan claros los límites con respecto a las responsabilidades de los diferentes niveles del gobierno.⁴¹

En 2017, el NDIA comenzó a implementar el programa de *Información, Vínculos y Desarrollo de Capacidades* (ILC) del NDIS.⁴² Simultáneamente, los Gobiernos de los Estados y de los Territorios se están retirando de las actividades existentes de tipo ILC. El ILC es un proyecto enfocado a corto plazo y no tiene la inversión necesaria ni para crear comunidades comunes inclusivas y accesibles ni para desarrollar capacidades en las personas con discapacidad.⁴³

- 4(c) Hay oportunidades limitadas para que las personas con discapacidad y sus organizaciones de representantes controlen y evalúen el NDIS. Los Informes de Desempeño Trimestrales del NDIS⁴⁴

no brindan información importante desde la perspectiva de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas. Las personas con discapacidad reconocieron la necesidad de mejorar el informe público de los procesos de revisión del NDIS.⁴⁵ El Comité Permanente Conjunto sobre el NDIS recomendó que se debe agregar un principio a la *Ley del NDIS* para garantizar que el NDIA colabore con las personas con discapacidad en el desarrollo y la revisión de sus planes y directrices operacionales.⁴⁶

Recomendaciones

Que Australia:

- Retire las Declaraciones Interpretativas relativas a los Artículos 12, 17 y 18 de la CRPD.
- En colaboración con las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, establezca un mecanismo de aplicación y supervisión permanente para garantizar la participación productiva en la elaboración e implementación de la legislación y de las políticas para la aplicación de la CRPD.
- Conforme al Comentario General 7 de la CRPD, garantice que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad tengan recursos adecuados para participar de manera eficaz en las actividades de aplicación y supervisión.
- Garantice que todas las personas con discapacidad tengan acceso a una defensa independiente, con recursos adecuados para hacer valer y ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud de la CRPD.
- Garantice que la nueva NDS tenga recursos adecuados, sea elaborada en un marco interseccional y contenga resultados mensurables, un marco de responsabilidad, y medidas para garantizar el desglose de datos en todas las áreas de la política.
- Establezca un alto nivel de independencia de la Oficina para la Inclusión de Personas con Discapacidad para impulsar a la NDS en todo el gobierno y para garantizar el cumplimiento de la CRPD.
- Aborde la desigualdad en el NDIS para los grupos marginados y elabore una Estrategia relativa al Género del NDIS.
- Modifique la Ley del NDIS para incluir un principio de colaboración con las personas con discapacidad y con sus organizaciones representativas.

Igualdad y no discriminación (artículo 5)

5. Más de un 75 % de las personas con discapacidad informan que sufren de discriminación debido a su impedimento.⁴⁷

Dado que no existe una Carta de Derechos o una Ley de Derechos Humanos a nivel federal,⁴⁸ aún existen vacíos legales importantes con respecto a la protección de los derechos humanos para las personas con discapacidad.⁴⁹

La legislación contra la discriminación existente de la *Commonwealth* y de la mayoría de los Estados/Territorios no protege ni contra la discriminación interseccional y sistémica, ni contra los delitos de difamación por razones de discapacidad. No existen medidas legislativas eficaces para abordar la lucha contra la discriminación interseccional. Las DPO y otros grupos no pueden presentar quejas de representantes en virtud de la DDA.

La denegación de una adaptación razonable es una forma de discriminación en virtud de la DDA. Sin embargo, en un caso reciente que tuvo lugar en los tribunales⁵⁰ se constató que una persona con discapacidad debía demostrar, a fin de que constituya discriminación, que la denegación del alojamiento razonable se debía al impedimento de la persona. Esto redundaría en la ineficacia de la DDA para abordar la denegación de un alojamiento razonable.⁵¹

Recomendaciones

Que Australia:

- Establezca una Ley de Derechos Humanos legalmente exigible, que incorpore las obligaciones australianas en virtud de la CRPD y de otros tratados sobre derechos humanos.
- Fortalezca las leyes contra la discriminación para abordar la lucha contra la discriminación interseccional; para que se puedan escuchar las quejas por parte de las DPO y de las organizaciones de defensa; y para que se permita la denuncia de delitos motivados por prejuicios y difamación por razones de discapacidad.
- Modifique la DDA para garantizar que las personas con discapacidad puedan presentar quejas de manera eficaz sobre la denegación de un alojamiento razonable.

Mujeres con discapacidad (artículo 6)

6. A pesar de las recomendaciones del Comité de la CRPD,⁵² de otros organismos del tratado y de mecanismos⁵³ de las Naciones Unidas, aún queda pendiente una legislación nacional sobre la prevención de todas las formas de violencia basada en el género.⁵⁴

El *Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos(as) 2010-2022*⁵⁵ es el principal marco político de Australia diseñado para prevenir la violencia contra las mujeres. El *Plan Nacional* solo aborda el abuso sexual y la violencia familiar/doméstica en el contexto de violencia en parejas íntimas.⁵⁶ Oculta y torna invisibles las formas estructurales e institucionales de la violencia basada en el género con relación a la ley, el estado y la cultura de que las mujeres con discapacidad no solo la sufren, y³ sino que también corren más riesgo.⁵⁷ Excluye las violaciones a los derechos reproductivos y muchos de los entornos y espacios en los que las mujeres con discapacidad sufren la violencia.⁵⁸

Las campañas nacionales de concienciación para abordar la violencia contra las mujeres no incluyen a las mujeres con discapacidad.⁵⁹ Existen graves restricciones metodológicas en los principales instrumentos de la encuesta utilizados para recopilar datos sobre violencia contra las mujeres que dan como resultado⁶⁰ bajos niveles significativos de representación de mujeres con discapacidad en los estudios basados en poblaciones con respecto a la frecuencia de la violencia doméstica y familiar, y al abuso sexual.⁶¹

La respuesta principal del servicio nacional de Australia para abordar y prevenir la violencia contra las mujeres es a través de su servicio 1800RESPECT,⁶² que se estableció en 2010 en virtud del *Plan Nacional* para brindar asesoramiento terapéutico confidencial, telefónico y en línea, e información y servicio de derivación. Hay limitaciones importantes en el 1800RESPECT para las mujeres con discapacidad, dado que el servicio se concentra en la violencia 'doméstica' y 'familiar', y en el abuso sexual en el contexto de una pareja íntima o en la violencia conyugal que se produce en entornos familiares entre cónyuges o parejas actuales o anteriores.⁶³

Recientemente, se tomaron algunas medidas y hubo iniciativas⁶⁴ bien recibidas para mejorar el apoyo y los servicios para las mujeres con discapacidad en virtud del *Plan Nacional*, pero estas han sido iniciativas aisladas y mayormente enfocadas en el proyecto, y no eran sistemáticas e integrales a nivel nacional. Además, la financiación para estas iniciativas le ha sido dada a grandes empresas con fines de lucro y a otros organismos gubernamentales,⁶⁵ y no se les ha dado financiación directa a las DPO.

Hay una falta de experiencia y una gama de barreras estructurales con respecto a la violencia doméstica, al abuso sexual y a los servicios para casos de crisis de mujeres que impiden las respuestas adecuadas para ayudar a las mujeres con discapacidad.⁶⁶

Hay oportunidades limitadas para que las mujeres con discapacidad participen en la elaboración de políticas con respecto a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género.⁶⁷ Las mujeres con discapacidad son marginadas de las iniciativas para controlar la implementación de la CEDAW y no hay respaldo gubernamental que les permita a las mujeres con discapacidad asistir o participar en la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW).⁶⁸

Recomendaciones

Que Australia:

- Elabore y promulgue legislación nacional sobre la prevención de todas las formas de violencia basadas en el género.
- Garantice que el *Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos(as)* incluya todas las formas de violencia basadas en el género, independientemente del entorno y de los perpetradores de dicha violencia.
- Aborde las restricciones metodológicas en los instrumentos para recopilación de datos utilizados para recabar datos sobre violencia contra las mujeres.

3 A los fines de este informe, el término 'mujeres con discapacidad' incluye niñas con discapacidad.

- Asegure que los servicios para la violencia basada en el género incluyan a mujeres y niñas con discapacidad.
- Financie y apoye a las DPO para formular e implementar iniciativas para abordar la violencia contra las mujeres con discapacidad.
- Apoye adecuadamente a las organizaciones y redes de mujeres con discapacidad para que participen en todas las iniciativas para fomentar la igualdad de género.

Niños(as) con discapacidad (artículo 7)

7(a)(b) No se dispone de políticas o programas que aborden el avance y la promoción de los derechos de los(las) niños(as) con discapacidad, incluso con respecto a la expresión de sus opiniones sobre todos los problemas que les conciernen. Cuando la discapacidad recibe una atención superficial, a menudo se la encuadra desde la perspectiva del riesgo y se pone énfasis en reducir la incidencia de la discapacidad. No existe una definición o un marco conceptual consensuado a nivel nacional con respecto al principio de los 'mejores intereses del niño', hecho que da como resultado una aplicación heterogénea en todas las jurisdicciones de Australia.

El *Marco Nacional para la Protección de los Niños de Australia 2009-2020*⁶⁹ es el marco político nacional para garantizar la seguridad y el bienestar de los(las) niños(as) en Australia. Sin embargo, a los niños con discapacidad se les presta una atención mínima según dicho Marco, ellos están segregados de las cuestiones más amplias concernientes al bienestar del niño, y de las acciones a tomar con respecto a la discapacidad no están focalizadas en el niño.⁷⁰ El Marco vence en 2020 y no hay indicios de un nuevo Marco nacional.

En 2013, se designó un Comisionado Nacional para la Infancia y, hasta la fecha, aún no se ha completado un trabajo sustantivo que describa, investigue, promueva y proteja los derechos de los niños con discapacidad.

7(c) Australia carece de un mecanismo integral para recopilar datos de niños y jóvenes con discapacidad. Los datos recopilados sobre el cuidado fuera de su hogar no están desglosados por discapacidad. El informe de la protección nacional del niño no incluye la condición de discapacidad.

7(d)(e) En 2019, los *Principios Nacionales para las Organizaciones de Niños Seguros*⁷¹ fueron avalados por el Consejo de Gobiernos de Australia. Los Principios están destinados a brindar un enfoque uniforme a nivel nacional para desarrollar culturas organizativas que fomenten la seguridad y el bienestar del niño. No obstante, estas no son obligatorias.

Más de un tercio de los niños que están en lugares de cuidado fuera de su hogar son indígenas. En comparación con los niños no indígenas, los niños indígenas tienen diez veces más probabilidades de estar al cuidado fuera de su hogar y nueve veces más de probabilidades de tener órdenes de protección y cuidado.⁷² Aún queda apoyo adecuado culturalmente inadecuado disponible para los niños indígenas con discapacidad y sus familias.⁷³

Recomendaciones

Que Australia:

- Incorpore los derechos de la CRPD, incluido el principio del mejor interés del niño, en la legislación, las políticas y los programas que se aplican a los niños y jóvenes.
- Elabore estrategias y mecanismos integrales para garantizar que los niños y jóvenes con discapacidad puedan participar en consultas, procesos de toma de decisiones y desarrollo de políticas que afecten su vida.
- Aborde la representación desproporcionada de niños indígenas que estén en lugares de cuidado fuera de su hogar y que tengan órdenes de protección y cuidado.
- Financie adecuadamente para dar respuestas y ayuda local y comunitaria, culturalmente apropiadas, para los niños indígenas con discapacidad.

Generar conciencia (artículo 8)

8(a)(b) No se dispone de una estrategia nacional cuya meta sea generar conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Si bien el Gobierno de Australia fomenta la concienciación de la discapacidad en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las actividades no siempre reflejan un enfoque basado en los derechos humanos en cuanto a la discapacidad; en 2018, se dejaron de otorgar, sin mediar consulta, los Premios Nacionales para la Discapacidad.^{74,75}

Desde el período del último informe, se dejaron de financiar varias iniciativas⁷⁶ para generar conciencia a nivel nacional.

El *Plan de la Segunda Implementación de la NDS (2015–2018)*⁷⁷ priorizaba las ‘actividades de comunicación’ como un área para ‘aumentar el esfuerzo nacional’.⁷⁸ Hasta la fecha, no existen actividades realizadas relacionadas con esta prioridad, y una evaluación de la NDS de 2018 detectó que se podría mejorar la concienciación pública esclareciendo las responsabilidades de los entes para fomentar la conciencia y el compromiso para respaldar las campañas de concienciación públicas.⁷⁹

8(c) No existe ni un mecanismo formal ni recursos adecuados para la participación de las personas con discapacidad -a través de sus organizaciones representativas- en el diseño, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las campañas que generen concienciación y estrategias.

Recomendaciones

Que Australia:

- Elabore una estrategia gubernamental en toda la nación para promover las imágenes positivas y los derechos humanos de las personas con discapacidad en consonancia con la CRPD.

Accesibilidad (artículo 9)

9. Hubo tres revisiones de las *Normas sobre Discapacidad para Tener Acceso al Transporte Público (2002)*⁸⁰ y cada revisión recomendaba el establecimiento de un marco nacional para el informe sobre cumplimiento. El Gobierno de Australia no ha actuado con respecto a esta recomendación.⁸¹ El transporte accesible sigue siendo un problema clave para las personas con discapacidad.⁸²
- Se carece de una estructura de gobernanza coherente para avanzar en la reforma de las *Normas sobre Discapacidad (acceso a predios: edificios) de 2010*. No se dispone de un marco coherente a nivel estado y territorio para recopilar datos relacionados con el desempeño de las Normas en los Predios; además no existe ni comprensión ni concienciación adecuada de las Normas.⁸³ Un porcentaje importante del entorno construido existente sigue siendo inaccesible.⁸⁴
- La DDA no abarca las *Normas Nacionales para los Servicios de Discapacidad (2013)*.⁸⁵ La supervisión y el cumplimiento están terciarizados a un organismo de certificación independiente.⁸⁶ No hay información pública sobre el cumplimiento del servicio con las Normas.
10. La DDA y la *NDS* siguen siendo el principal marco legislativo y político diseñado para incrementar la igualdad de accesos para las personas con discapacidad. No obstante, aún queda pendiente la accesibilidad al transporte, al entorno construido, a las viviendas, a la información y a los modos de comunicación.⁸⁷ Se registró un impacto mínimo en lo referente al aumento de la igualdad de acceso para las personas con discapacidad.⁸⁸
11. No hay requisitos de acceso nacional obligatorios para la vivienda. Las *Directrices de Diseño de Viviendas Habitables*⁸⁹ plantean objetivos que aspiran a lograr que todas las casas nuevas tengan un diseño estándar de vivienda habitable acordado para 2020.⁹⁰ Se estima que solo un 5 % de la construcción de viviendas nuevas cumplirá con las normas para 2020.⁹¹ Es necesario que se logre un cambio en la intervención reguladora a través del *Código Nacional de Construcción*.^{92,93}

Recomendaciones

Que Australia:

- Establezca y promulgue un marco nacional para informar sobre el cumplimiento obligatorio relativo a las *Normas sobre discapacidad para tener acceso al transporte público*; las *Normas sobre discapacidad (acceso a predios: edificios)*; y las *Normas nacionales sobre los servicios de discapacidad*.
- Modifique el *Código Nacional de Construcción* para exigir las condiciones de acceso mínimo a todas las viviendas nuevas y a las sustancialmente modificadas.
- Incorpore medidas para abordar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de accesibilidad en virtud del Artículo 9 de la CRPD.

Derecho a la vida (artículo 10)

Las personas con discapacidad tienen una esperanza de vida de hasta 20 años menos que aquellas sin discapacidad.⁹⁴

La menor esperanza de vida tiene un mayor impacto sobre las personas indígenas con discapacidad. La tasa de discapacidad de las personas indígenas, incluidos los niños,⁹⁵ es del doble que la de la población en general.⁹⁶ La brecha entre la esperanza de vida de los australianos indígenas y la de los no indígenas es de aproximadamente 10,6 años para los hombres y 9,5 años para las mujeres.⁹⁷ Los niños indígenas tienen el doble de probabilidad que los niños no indígenas de morir antes de la edad de cinco años.⁹⁸

En 2017, el suicidio estaba entre las causas más importantes de muerte entre los niños indígenas de entre 5 y 17 años.⁹⁹ Los niños indígenas que tienen entre 10 y 14 años mueren por suicidio a una tasa de un 8,4 mayor que la de los niños no indígenas.¹⁰⁰

El suicidio sigue siendo la causa principal de muerte entre las personas que tienen entre 15 y 44 años,¹⁰¹ lo que equivale a más de ocho muertes por suicidio por día.¹⁰² La tasa de suicidio entre las personas indígenas es más del doble que la tasa nacional.¹⁰³ Una cantidad alarmante de personas con discapacidad expresan ideas de suicidio, en su mayoría debidas a la falta de apoyo, a la pobreza y al aislamiento.¹⁰⁴

En comparación con la población en general, las personas con discapacidad intelectual tienen una esperanza de vida promedio de hasta 26 años menos¹⁰⁵ y tienen el doble de probabilidad de morir por causas potencialmente evitables.¹⁰⁶

La tasa de muertes prematuras y evitables de las personas con discapacidad en entornos de asistencia es alarmantemente elevada. Más de la mitad de todas las muertes en entornos de asistencia son consideradas como inesperadas y potencialmente evitables.¹⁰⁷

Recomendaciones

Que Australia:

- En consulta con las personas indígenas, elabore medidas para abordar la alta tasa de suicidio, con medidas específicas para los niños indígenas.
- Garantice que el *Plan Nacional de Salud Mental y Prevención del Suicidio* incluya medidas específicas para las personas con discapacidad.
- Garantice que la formación de los profesionales sanitarios incluya la educación sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, en cuanto al derecho a la vida y al acceso a la atención y tratamiento adecuados para cubrir sus necesidades vitales.

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (artículo 11)

12. No existen normas de gestión uniformes ante casos de emergencia a nivel nacional que garanticen el acceso a la ayuda adecuada para la discapacidad y para las personas con discapacidad específica para situaciones de emergencia.¹⁰⁸

El Departamento de Asuntos Interiores está liderando la denuncia de Australia contra el Marco de Sendai¹⁰⁹ y llevando a cabo la implementación¹¹⁰ a nivel nacional; sin embargo, no se dispone de un mecanismo para la participación de las personas con discapacidad.

Los efectos del cambio climático están exacerbando las desigualdades económicas y sociales, que ya contribuyen a profundas desigualdades para las personas con discapacidad, específicamente, para las personas indígenas con discapacidad en áreas remotas.¹¹¹

Recomendaciones

Que Australia:

- Establezca un mecanismo para que las personas con discapacidad participen en la aplicación y supervisión del Marco de Sendai.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12)

- 13(a) El Informe *'Igualdad, Capacidad y Discapacidad en las Leyes de la Commonwealth'*¹¹² fue propuesto en el Parlamento en 2014. Una recomendación clave fue la reforma de los marcos legales y de las leyes estatales y territoriales de la *Commonwealth*¹¹³ concernientes a la toma de decisiones de las personas basada en las *Directrices y Principios Nacionales para la Toma de Decisiones* para implementar mecanismos avalados de toma de decisiones basados en la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Cinco años más tarde, aún no hay respuesta del gobierno con respecto a este Informe.
- 13(b) No hay una formación integral en todos los niveles nacionales estatales y territoriales para todos los participantes sobre el reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Una serie de leyes, políticas y prácticas de Australia, que incluyen leyes en materia de tutela, administración del patrimonio y salud mental niegan el reconocimiento de las personas con discapacidad como personas iguales ante la ley, y niegan la posibilidad de dichas personas a ejercer el derecho a su capacidad jurídica. Australia sigue confiando en su Declaración Interpretativa para insistir en el hecho de que este marco legislativo y político cumple con el artículo 12, a pesar del hecho de que viola, es incongruente o no cumple con las obligaciones de la CRPD según se describe en el Comentario General Núm. 1.

Recomendaciones

Que Australia:

- Modifique, derogue o anule aquellas leyes o políticas, y neutralice toda práctica o costumbre que tenga por objeto o efecto negar o disminuir el reconocimiento de cualquier persona con discapacidad como persona ante la ley.
- Implemente las recomendaciones del Informe de 2014 *'Igualdad, Capacidad y Discapacidad en las Leyes de la Commonwealth'*.

Acceso a la justicia (artículo 13)

14. No existen datos desglosados uniformes a nivel nacional sobre la cantidad de personas con discapacidad en el sistema de justicia penal, a pesar de que los datos disponibles indican una importante representación desproporcionada, específicamente para las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial.¹¹⁴
- Los jóvenes indígenas, específicamente aquellos con discapacidad, están representados desproporcionadamente en el sistema judicial juvenil, que incluye la supervisión basada en la detención (24 veces mayor que la tasa de los jóvenes no indígenas) y la supervisión basada en la comunidad (17 veces mayor que la tasa para los jóvenes no indígenas).¹¹⁵
- Las personas indígenas con discapacidad tienen 14 veces más de probabilidad de ser encarcelados que el resto de la población.¹¹⁶ El 50 % de la población total encarcelada da cuenta de un historial de discapacidad psicosocial,¹¹⁷ casi un tercio da cuenta de una discapacidad,¹¹⁸ y el 25 %–30 % de los prisioneros tienen una discapacidad intelectual.¹¹⁹ Las mujeres indígenas son la población con mayor índice de crecimiento en las cárceles de Australia. Un porcentaje importante tiene deficiencia cognitiva, así como también una discapacidad psicosocial no diagnosticada.¹²⁰ A las personas con discapacidad se las envía a las cárceles porque los tribunales tienen pocas opciones o vías alternativas para contemplarlos.¹²¹
- 15(a)(b) Las personas con discapacidad que participan del sistema de justicia enfrentan barreras significativas y muchas de ellas encuentran que el acceso a la justicia es difícil, hostil e ineficaz. Como consecuencia, a menudo se las deja sin reparación jurídica. Las personas con discapacidad informan que el sistema legal y judicial no está formado adecuadamente para darles apoyo, y sienten que se les niegan las mismas oportunidades de participar en el sistema judicial que a las personas sin discapacidad.¹²²
- Las actitudes discriminatorias, una falta de servicios y programas de apoyo, y medidas mínimas de adecuaciones legales o procesales, a menudo implican que las personas con discapacidad sean consideradas como no creíbles, como incapaces de ofrecer pruebas, de tomar decisiones legales o de participar en los procesos legales.
- 15(c) No existen medidas congruentes a nivel nacional que unifiquen la reglamentación de la composición del jurado con la CRPD. Las leyes de Australia no son uniformes y las personas sordas, en particular, aún no pueden servir como jurado en virtud de las leyes estatales y territoriales.¹²³
- 15(d) La incapacidad para acceder a una justicia eficaz da como resultado que muchas personas con discapacidad sean excluidas sin protección y con riesgo de violencia permanente o, que posiblemente sean encarceladas y estén destinadas a tener reiterados contactos con el sistema de justicia penal.¹²⁴
- 15(e) El informe de la *Encuesta Nacional sobre la Tasa de Encarcelamiento de las Personas Indígenas*¹²⁵ de 2017 recomendaba que los gobiernos estatales y territoriales y de la *Commonwealth* deberían brindar apoyo para establecer un organismo de reinversión de la justicia independiente; crear tribunales especializados en dictar sentencia a personas indígenas y encargar una encuesta nacional en materia de leyes de protección infantil y de procesos que afectan a los niños indígenas. El Gobierno de Australia aún no ha dado respuesta a este informe.

Recomendaciones

Que Australia:

- En consulta con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones de representantes, coordine la elaboración de las Estrategias de Justicia para la Discapacidad uniformes a nivel nacional en todos los gobiernos para garantizar que las personas con discapacidad reciban apoyo para acceder a las mismas protecciones legales y a las mismas reparaciones que el resto de la comunidad.
- Implemente un conjunto complementario de programas y mecanismos y sentencias alternativas, específicamente por origen cultural y género, que se integre con paquetes flexibles de apoyo a la discapacidad y programas de asistencia social, para impedir que los adultos con discapacidad entren en contacto o pasen por el sistema de justicia penal.

- Garantice que se incorporen módulos sobre el trabajo con personas con discapacidad en los programas de formación obligatorios de la policía, agentes penitenciarios, abogados, funcionarios judiciales y cualquier otro personal de los juzgados.
- Aborde la representación desproporcionada de los jóvenes indígenas en el sistema judicial juvenil.
- Implemente las recomendaciones de la *Encuesta Nacional sobre la Tasa de Encarcelamiento de las Personas Indígenas*.

Libertad y seguridad de la persona (artículo 14)

16. Existen temas importantes con respecto a los marcos legislativos, políticos y prácticos, que dan como resultado la detención arbitraria y el tratamiento forzoso de las personas con discapacidad, especialmente aquellas que sufren de manera desproporcionada, tales como las personas indígenas con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psicosocial.¹²⁶
- 16(a) Hay al menos 100 personas detenidas sin condena en las cárceles, en las unidades psiquiátricas y en los servicios de detención forenses de toda Australia en virtud de la legislación sobre deficiencia mental.¹²⁷ Estas personas son predominantemente indígenas, tienen deficiencia cognitiva o psicosocial, barreras de comunicación culturales o pérdida de la audición.¹²⁸
- En el EPU de 2016,¹²⁹ Australia asumió el compromiso voluntario¹³⁰ de mejorar la manera en que el sistema de justicia penal trata a las personas con discapacidad cognitiva, que no se pueden defender o a las que no se pueden declarar culpable debido a su deficiencia mental. En 2016, los Gobiernos de Australia¹³¹ propusieron el *Proyecto de Declaración Nacional de los Principios relativos a las Personas que no se pueden Defender o no se pueden Declarar Culpables debido a su Deficiencia de Salud Mental o Cognitiva*. Sin embargo, tres años más tarde, estos Principios aún se deben consultar, avalar o implementar.
- 16(b)(c) Las Declaraciones Interpretativas de Australia relativas a los Artículos 12 y 17 de la CRPD permiten la continuidad de las leyes en materia tutelar y de salud mental que privan de libertad a las personas debido a su discapacidad, y se las somete a intervenciones médicas forzosas, tanto en instituciones como en la comunidad. Si bien hubo algunas revisiones y modificaciones a estas leyes, no se tomó una medida para poner fin a la internación involuntaria basada en la discapacidad o para poner fin a las intervenciones médicas forzosas. Como resultado, muchas personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial sufren graves violaciones a sus derechos humanos.¹³²
17. El Senado australiano propuso su *Informe de Encuesta sobre la Detención Indefinida de las Personas con Deficiencias Cognitivas y Psiquiátricas* en Australia en 2016.¹³³ El Gobierno de Australia aún no ha dado respuesta a este Informe.

Recomendaciones

Que Australia:

- Con carácter urgente, termine con el uso no autorizado de prisión para la gestión de personas con discapacidad no condenadas.
- Consulte con las personas con discapacidad acerca del *Proyecto de Declaración Nacional de los Principios relativos a las Personas que no se pueden Defender o no se pueden Declarar Culpables debido a su Deficiencia de Salud Mental o Cognitiva* y acerca de otras medidas para abordar la detención indefinida de personas con discapacidad no condenadas.
- Implemente las recomendaciones del *Informe de Encuesta sobre la Detención Indefinida de las Personas con Deficiencias Cognitivas y Psiquiátricas* del Senado de Australia de 2016.
- Modifique, derogue o anule aquellas leyes o políticas, y neutralice toda práctica o costumbre que permita la privación de libertad a las personas con discapacidad debido a su discapacidad y se las someta a intervenciones médicas forzosas.
- Garantice que los marcos legislativo, administrativo y político que privan a las personas con discapacidad de su libertad y afectan su seguridad sean totalmente conforme a la CRPD.

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15)

18(a) Australia no retiró ni derogó la legislación, las políticas y las prácticas que permiten la modificación de la conducta o prácticas represivas contra las personas con discapacidad, incluso contra los niños.

A una gran cantidad de personas con discapacidad, incluso a niños, se les administra medicamentos psicotrópicos, tienen restricción física y reclusión bajo la apariencia de políticas y prácticas de 'tratamiento conductual', que incluyen escuelas, predios sanitarios para salud mental o discapacidad, hospitales y entornos de asistencia para adultos mayores.¹³⁴

No existe un marco protector regulador que proteja a los niños con discapacidad y que evite que sean sometidos a modificar su conducta y a prácticas represivas en las escuelas.

A los niños con discapacidad se los retiene y reprime en centros de detención para adultos, y sufren violaciones graves a sus derechos humanos.¹³⁵

El uso de tratamientos forzosos y prácticas represivas a las personas con discapacidad psicosocial ha aumentado abruptamente en los últimos años. Los datos disponibles sobre el 'Tratamiento' electroconvulsivo (TEC) realizado en pacientes de manera involuntaria indica que las mujeres tienen tres veces más probabilidad que los hombres de ser sometidas a esta práctica en todos los grupos de edades.¹³⁶

El *Marco Nacional para Reducir y Eliminar el Uso de Prácticas Represivas (2014)*¹³⁷ y las *Reglamentaciones del NDIS (Práctica Represiva y Apoyo Conductual) de 2018*¹³⁸ tienen importantes limitaciones y les permiten a los Estados y Territorios el uso de prácticas represivas. El Marco y las Reglamentaciones del NDIS se centran más en cuándo y cómo utilizar las prácticas represivas que en prohibir su uso.¹³⁹

18(b) En 2017, Australia ratificó el *Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT)* y comenzó el establecimiento de un Mecanismo Nacional Preventivo (NPM) de Australia. El Defensor del Pueblo de la *Commonwealth* ha sido nombrado Coordinador del NPM responsable de la inspección de los lugares de detención de la *Commonwealth*.¹⁴⁰ Su implementación está destinada a poner el foco en los lugares de detención 'primarios',¹⁴¹ que incluyen ciertos predios cerrados psiquiátricos y para discapacidad. Sin embargo, hay una falta de participación de las personas con discapacidad con respecto al desarrollo y la implementación de los NPM que incluyen la discapacidad.¹⁴²

Australia no ha implementado las Observaciones Concluyentes correspondientes a las personas con discapacidad que surgen de la revisión del Comité contra la Tortura de 2014 de los cuartos y quintos informes periódicos combinados de Australia.¹⁴³

Recomendaciones

Que Australia:

- Con carácter urgente, termine con la práctica de detención y represión de niños con discapacidad en los centros de detención para adultos.
- Establezca un marco nacional coherente para la protección de personas con discapacidad, desde la modificación de la conducta hasta la eliminación de prácticas represivas en una amplia gama de establecimientos.
- Establezca y financie un mecanismo de compromiso para la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, el desarrollo, la aplicación y la supervisión de los NPM que incluyen la discapacidad.
- Implemente las Observaciones Concluyentes correspondientes a las personas con discapacidad que surgen de la revisión del Comité contra la Tortura de 2014 de los cuartos y quintos informes periódicos combinados de Australia.

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (artículo 16)

19(a) En abril de 2019 se anunció la *Comisión Real respecto de la Violencia, Abuso, Explotación y Descuido de Personas con Discapacidad*.¹⁴⁴ Las personas con discapacidad agradecen la inclusión en los Términos de Referencia de todas las formas de violencia y abuso contra las personas con discapacidad, en todos los entornos. Sin embargo, las personas con discapacidad están preocupadas porque algunos comisionados nombrados han tenido puestos sénior dentro de los sistemas que serán investigados, hecho que derivará en conflictos de interés inmanejables. También hay un descontento en cuanto al hecho de que los Términos de Referencia no incluyen el establecimiento de un programa de reparación.¹⁴⁵

No hay un mecanismo nacional que registre la incidencia, la frecuencia, el grado, la naturaleza, las causas y el impacto de la violencia, el abuso, la explotación y el descuido de las personas con discapacidad.¹⁴⁶ Tampoco hay un proceso nacional para informar acerca de los datos disponibles de las experiencias de las personas con discapacidad, para comprender los temas de calidad de datos o para detectar y completar la falta de datos.¹⁴⁷

Más de un tercio de las personas con discapacidad informan que sufren violencia o abuso, y casi un 50 % de las personas con discapacidad manifiestan sentirse inseguras en el lugar donde viven.¹⁴⁸

19(b) No hay mecanismos accesibles, de supervisión, de quejas y de reparación a nivel nacional para las personas con discapacidad que sufren violencia, abuso, explotación y descuido.

La *Comisión de Salvaguarda y Calidad del NDIS*¹⁴⁹ fue establecida en julio de 2018, pero solo tiene autoridad para supervisar las salvaguardas para los participantes del NDIS, que equivalen a menos del 10 % de la población de Australia de personas con discapacidad. Para febrero de 2019, la Comisión había recibido denuncias sobre 1459 incidentes declarados,¹⁵⁰ 18 prestadores estuvieron bajo investigación y sujetos a medidas de cumplimiento y la Comisión había tramitado más de 600 quejas.¹⁵¹

19(c) Los servicios de asesoramiento terapéutico especializados en situaciones traumáticas financiados por el Gobierno de Australia solo brindan asesoramiento telefónico, que es inaccesible para un porcentaje importante de personas con discapacidad, incluso para aquellos expuestos a la violencia o al abuso en entornos institucionales.

Recomendaciones

Que Australia:

- En consonancia con los 'Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas a las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones' [A/RES/60/147] garantice la implementación de un programa de reparación en la *Comisión Real respecto de la Violencia, Abuso, Explotación y Descuido de las Personas con Discapacidad*.
- Revise los conflictos de interés de los comisionados nombrados en la Comisión Real y expulse a aquellos comisionados que han trabajado en sistemas de servicios que serán investigados.
- Establezca un mecanismo accesible, de supervisión, de quejas y de reparación a nivel nacional para las personas con discapacidad que sufren violencia, abuso, explotación y descuido, en todos los entornos.

Integridad de las personas (artículo 17)

20(a) La esterilización forzosa de las personas con discapacidad, específicamente de mujeres y niñas con discapacidad, es una práctica constante que sigue siendo legal y que está sancionada por los Gobiernos de Australia.¹⁵² Desde 2005, los organismos del tratado de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y los organismos médicos internacionales han recomendado que Australia promulgue una legislación nacional que prohíba la esterilización forzosa.¹⁵³ Los organismos que supervisan el tratado han expresado su preocupación sobre el hecho de que el Gobierno de Australia sigue considerando la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad como un asunto que debe ser regulado por los gobiernos estatales. Han aclarado que el poder del gobierno descentralizado mediante la delegación o el traspaso no niega la obligación de una parte estatal de promulgar una legislación nacional que sea aplicable en toda su jurisdicción.¹⁵⁴

La respuesta de Australia¹⁵⁵ a estas recomendaciones mantiene el foco en la reglamentación y en las directrices no vinculantes más que en la prohibición.¹⁵⁶ La Declaración Interpretativa del artículo 12 de la CRPD indica que es legal esterilizar de manera forzosa a los niños y adultos con discapacidad, siempre que ellos ‘carezcan de capacidad’ y que el procedimiento sea realizado para su ‘mejor interés’.

La anticoncepción forzosa¹⁵⁷ de mujeres con discapacidad, a través del uso de drogas supresoras de la menstruación es una práctica actualmente generalizada en Australia y rara vez, si es que ocurre, está sujeta a la supervisión o revisión independiente.¹⁵⁸

El tratamiento antiandrogénico forzoso para controlar el deseo sexual y el funcionamiento [hormonal] de hombres y niños con discapacidad no está regulado y es una práctica común en la profesión médica.

20(b) Se llevan a cabo cirugías y otras intervenciones médicas en bebés y niños con variaciones intersexuales sin su consentimiento informado o prueba de la necesidad. Estos procedimientos invasivos y, a menudo, irreversibles¹⁵⁹ se denominan en el Comentario General 3 “como tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante”.¹⁶⁰

Un informe del Comité del Senado de 2013¹⁶¹ contenía una serie de recomendaciones, que incluía posponer el tratamiento médico irreversible en niños intersexuales hasta que puedan dar su consentimiento personal, pero estas recomendaciones no se han implementado. Australia no ha implementado las recomendaciones de 2018 del Comité de la CEDAW que [indica] que Australia:

“Adopte disposiciones legislativas claras que prohíban explícitamente llevar a cabo cirugías innecesarias u otros procedimientos médicos en niños intersexuales antes de que alcancen la edad legal para dar su consentimiento; implemente las recomendaciones hechas por el Senado en 2013 sobre la base de su encuesta en cuanto a la esterilización involuntaria o coercitiva de las personas intersexuales; brinde asesoramiento adecuado y apoyo para las familias de niños intersexuales, y reparación para las personas intersexuales que han sido sometidas a dichos procedimientos”.¹⁶²

Recomendaciones

Que Australia:

- Desarrolle y promulgue una legislación nacional, uniforme, que se pueda implementar de manera legal y que prohíba la esterilización de niños y la esterilización de adultos sin su consentimiento previo libre y totalmente informado.
- Elimine la práctica de la administración no consensuada de medicamentos supresores de la menstruación y de tratamientos antiandrogénicos.
- Desarrolle y promulgue una legislación nacional, uniforme, que se pueda implementar de manera legal y que prohíba las intervenciones médicas innecesarias, que incluye intervenciones quirúrgicas y hormonales en niños y adultos intersexuales sin su consentimiento previo libre y totalmente informado.

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (artículo 18)

21. La Declaración Interpretativa relativa al Artículo 18 mantiene el enfoque administrativo y legislativo actual de Australia para procesar las solicitudes de visado. La DDA estipula una exención para ciertas disposiciones de la *Ley sobre Migraciones de 1958*, que implica que los acuerdos inmigratorios de Australia y el tratamiento de la discapacidad no pueden cumplir con las obligaciones de protección igualitaria en virtud del Artículo 5 de la CRPD.

Casi todos los solicitantes de visado deben cumplir con los requisitos sanitarios a fin de que se les otorgue el visado, hecho que es indirectamente discriminatorio contra las personas con discapacidad.¹⁶³ La ley y los procesos migratorios tratan a las personas con discapacidad exclusivamente como una carga económica.¹⁶⁴ Se considera que los niños o los miembros de la familia con discapacidad son un riesgo para la salud, de modo que se impide que el niño o la familia migre o se quede en Australia.¹⁶⁵

Los solicitantes de asilo o las personas con discapacidad que viven en Australia con visas no permanentes no son elegibles para acceder al NDIS, dado que no cumplen con los requisitos de residencia. Es necesario tener diez años de residencia para poder calificar para las Pensiones de apoyo por discapacidad y edad,¹⁶⁶ lo que expone a los inmigrantes con discapacidad a un mayor riesgo de violación a una serie de derechos humanos.

Las prácticas, las políticas y las leyes de Australia para solicitantes de asilo han dado como resultado violaciones institucionalizadas, graves y habituales a la prohibición de la tortura y el maltrato; y, como consecuencia, se ha encontrado que generan dolor y sufrimiento físico y mental, y siguen provocando discapacidades y deficiencias permanentes.¹⁶⁷

A más de un tercio de las personas que están en detención se les ha diagnosticado discapacidad psicosocial.¹⁶⁸ Las mujeres solicitantes de asilo o refugiadas sufren violaciones y abuso sexual;¹⁶⁹ sin embargo, aún no se ha implementado un mecanismo de investigación independiente; además, cuando se denuncian incidentes, rara vez se llevan a cabo investigaciones o sanciones adecuadas.¹⁷⁰

Recomendaciones

Que Australia:

- Elimine la exención en la DDA, dado que se aplica a la *Ley de Migraciones* para garantizar que los acuerdos inmigratorios de Australia y el tratamiento de la discapacidad cumplan con las obligaciones igualitarias de protección en virtud del Artículo 5 de la CRPD.
- Aumente la uniformidad, transparencia y justicia administrativa para los inmigrantes y refugiados con discapacidad que solicitan un visado de Australia.
- Elimine el período de calificación de 10 años para que los inmigrantes accedan a las Pensiones de apoyo por discapacidad y edad.
- Ponga fin, con carácter urgente, a la detención obligatoria e indefinida de las personas solicitantes de asilo.

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19)

22(a) No existe un marco nacional para el cierre de las instituciones residenciales en Australia. Más de un 5,2 % de las personas con discapacidad vive en un alojamiento con asistencia, tales como hogares grupales,¹⁷¹ y otro 2,8 % vive en establecimientos para alojamiento con apoyo.¹⁷² Estos datos no están desglosados. Las personas con discapacidad que viven bajo cuidado residencial mueren por lo menos 25 años antes que la población general.¹⁷³

22(b) Muchas personas con discapacidad, que incluyen los participantes del NDIS, se ven forzados a vivir en instituciones, residencias, cuidado institucional y centros asistenciales para adultos mayores¹⁷⁴ a fin de recibir los apoyos de cuidado personal y social.¹⁷⁵ Más de 1 de cada 20 jóvenes que vive en residencias de cuidado para adultos mayores que han solicitado la financiación del NDIS, han sido considerados no elegibles.¹⁷⁶ Muchas personas con discapacidad no tienen acceso a los apoyos que necesitan y no pueden pagar el apoyo que necesitan.¹⁷⁷

El acceso a viviendas adecuadas, disponibles, accesibles y asequibles sigue siendo un tema importante para las personas con discapacidad, que se torna más evidente con la implantación del NDIS.¹⁷⁸ Se estima que entre 35 000 y 55 000 participantes del NDIS no verá satisfechas sus necesidades de vivienda durante la primera década del programa.¹⁷⁹ Hay más de 200 000 personas en lista de espera para viviendas públicas y sociales en todo el país.¹⁸⁰

Los resultados de la participación social para las personas con discapacidad han empeorado desde el último período sobre el cual se informó.¹⁸¹ Muchas de las personas con discapacidad manifiestan importantes sentimientos de aislamiento social.¹⁸² Casi un 16 % de las personas con discapacidad no puede salir de su casa con la frecuencia que desearían¹⁸³ debido a las actitudes discriminatorias y a las presunciones negativas.¹⁸⁴

Recomendaciones

Que Australia:

- Elabore un plan nacional para el cierre de entornos institucionales residenciales, y desarrolle opciones de apoyo y vivienda basadas en la comunidad para las personas con discapacidad.
- Incremente significativamente la oferta, asequibilidad y accesibilidad a la vivienda pública y social, para garantizar que las personas con discapacidad tengan un mayor nivel de independencia y libertad.
- Permita a las personas con discapacidad controlar los recursos que necesitan para vivir con dignidad en la comunidad, que garanticen que las personas con discapacidad puedan elegir dónde y con quién desean vivir.

Movilidad personal (artículo 20)

La implementación del NDIS está haciendo mejoras para que algunos participantes del NDIS obtengan la ayuda y los equipos de movilidad y accesibilidad; sin embargo, se carece de uniformidad en este proceso.

Si bien las personas indígenas con discapacidad [que viven] en áreas remotas y que acceden al NDIS pueden recurrir a ayudas y equipos, no hay un reconocimiento de los obstáculos estructurales más amplios que pueden impedir el uso de dichos equipos, tales como viviendas inaccesibles, falta de veredas, falta de servicios, y aislamiento.

Más del 50 % de las personas con discapacidad manifiestan que tienen dificultad para moverse en toda Australia y a nivel internacional debido a su discapacidad.¹⁸⁵ Existen límites con relación al período durante el cual una persona puede viajar al exterior y mantener la Pensión de apoyo por discapacidad (DSP). Solo un tercio de las personas con discapacidad pueden acceder tanto a los espacios públicos como a los espacios privados que deseen.¹⁸⁶

Recomendaciones

Que Australia:

- En colaboración con las personas indígenas con discapacidad, sus organizaciones representativas y comunidades, elabore soluciones pertinentes a nivel local para abordar los obstáculos estructurales subyacentes que puedan impedir el uso de ayuda y equipos en áreas remotas.
- Modifique las restricciones a los viajes internacionales para las personas con discapacidad que tienen una DSP.

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (artículo 21)

- 23(a) Australia no reconoce la lengua de señas australiana (Auslan) como lengua nacional.
- 23(b) No existen Normas de Comunicación e Información que exijan que la información sea totalmente accesible.¹⁸⁷ No hay normas mínimas obligatorias para las organizaciones del sector público y gubernamental para garantizar el acceso y el uso de la web,¹⁸⁸ y para que se brinde información y servicios accesibles al público.
- 23(c) Muchas personas con discapacidad no pueden gozar de la libertad de expresión y opinión debido a la carencia de apoyos de comunicación, y al acceso desigual a la información. Un 67 % de las personas con discapacidad manifiestan que la información gubernamental es inaccesible o difícil de comprender.¹⁸⁹

Recomendaciones

Que Australia:

- Actúe para garantizar que se reconozca la Auslan como lengua nacional y que los derechos de las personas sordas sean legalmente reconocidos para utilizar la Auslan.
- Elabore Normas de Información y Comunicación que exijan que la información sea totalmente accesible y que los apoyos para la comunicación estén habitualmente disponibles.
- Elabore una *Ley sobre Escritura Sencilla* que exija que las entidades gubernamentales utilicen una comunicación clara para que el público pueda comprenderla.

Respeto del hogar y de la familia (artículo 23)

En Australia, un progenitor con discapacidad tiene diez veces más de probabilidades que otro progenitor sin discapacidad de que lo separen del cuidado de un hijo(a)¹⁹⁰, a menudo basándose en la discapacidad del progenitor, más que en la prueba de descuido o abuso.¹⁹¹ En 2013, el Consejo Australiano de Entidades de los Derechos Humanos (ACHRA) recomendó que el Gobierno de Australia tome medidas urgentes sobre la discriminación contra los padres con discapacidad; sin embargo, esta recomendación no se ha implementado aún.¹⁹²

Más de un 15 % de las personas con discapacidad dan cuenta de su dificultad para acceder a los servicios para ayudarlos a ejercer su rol paterno/materno.¹⁹³

Las personas con discapacidad en Australia sufren violaciones graves a los derechos reproductivos y sexuales.¹⁹⁴ Las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad de la comunidad LGBTIQ+ sufren una importante discriminación para acceder a tecnologías de reproducción asistida.¹⁹⁵

Recomendaciones

Que Australia:

- Encargue una encuesta nacional a nivel nacional sobre el entorno de apoyo social, político y legal que permite la separación de bebés y niños de padres con discapacidad.
- Actúe para garantizar que las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad de la comunidad LGBTIQ+ tengan acceso en condiciones de igualdad a tecnologías de reproducción asistida.
- Establezca medidas completas e intensivas para el apoyo familiar y a los progenitores con discapacidad, por género y cultura, que ayuden a mantener a los niños con sus padres y en sus propios hogares familiares.

Educación (artículo 24)

24. No existen datos nacionales en cuanto a la suspensión, limitación o aislamiento de alumnos con discapacidad. Sin embargo, la base probatoria muestra índices alarmantes de acoso escolar (*bullying*) y de represión y aislamiento.¹⁹⁶ Hay una cantidad cada vez mayor de incidentes que denuncian niños con discapacidad a quienes se los pone en ‘espacios de retiro’, que se suman de manera eficaz a la represión y al aislamiento en espacios cercados, jaulas o armarios.¹⁹⁷
25. No existe un marco legislativo o político para la educación inclusiva, que incluya Normas sobre Discapacidad para la Educación (2005) que cumpla cabalmente con el Artículo 24 y el Comentario General 4 de la CRPD.¹⁹⁸

Las personas con discapacidad tienen niveles de logros educativos significativamente más bajos que aquellas sin discapacidad. Solo el 36 % de las personas con discapacidad entre 15 y 64 años terminan la educación secundaria en comparación con el 60 % de las personas sin discapacidad.¹⁹⁹ El 28 % de las personas en edad escolar con discapacidad no asiste a la escuela.²⁰⁰

Los alumnos con discapacidad habitualmente sufren de discriminación,²⁰¹ falta de apoyo, maestros inadecuadamente formados, carencia de experiencia y una arraigada cultura sistémica de bajas expectativas.²⁰² Aproximadamente 3 de cada 4 alumnos con discapacidad tienen dificultades en la escuela y, esto se debe especialmente, a la [falta de] integración social, a las dificultades de comunicación y a las dificultades de aprendizaje.²⁰³

La tasa de retención hasta el Año 12 para los alumnos indígenas es significativamente menor que para los alumnos no indígenas.²⁰⁴

26. La segregación de los alumnos con discapacidad ha aumentado de manera significativa en la última década, y hubo un cambio en cuanto a que los alumnos con discapacidad asisten a escuelas especiales²⁰⁵ y no a las escuelas comunes. La cantidad de alumnos con discapacidad que asisten a escuelas especiales aumentó un 35 % entre 2003 y 2015. Este aumento está respaldado por un incentivo de financiación, en el que un niño con discapacidad recibe mayor financiación si asiste a una escuela especial en lugar de a una escuela común.²⁰⁶

En mayo de 2017, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación acerca del aumento de la educación segregada y recomendó que Australia implemente medidas para garantizar que los niños con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva.²⁰⁷

Australia está intentando rechazar sus obligaciones para con los derechos humanos, al tratar de encontrar una explicación por parte del Comité “que los Estados Partes pueden ofrecer educación a través de clases o escuelas especializadas de conformidad con el artículo 24”.²⁰⁸

Recomendaciones

Que Australia:

- Formule un Plan de Acción para la Educación Inclusiva a nivel nacional que incluya un marco legislativo y político que cumpla absolutamente con el Artículo 24 y el Comentario General 4 de la CRPD.
- Aborde la tasa creciente de segregación de alumnos con discapacidad y redirija los recursos adecuados para que los alumnos sean totalmente incluidos en escuelas comunes.
- En consulta con las personas indígenas y sus organizaciones representativas, establezca y administre programas e iniciativas que respeten su cultura para aumentar la tasa de retención de alumnos indígenas en las escuelas.

Salud (artículo 25)

27(a)(b) Las personas con discapacidad tienen 10 veces más de probabilidades que las personas sin discapacidad de que su salud sea evaluada como deficiente.²⁰⁹ El 50 % de las personas con discapacidad no tiene acceso a la atención sanitaria, a las instalaciones y a los tratamientos que ellos necesitan, y más de la mitad manifiesta que los prestadores de asistencia sanitaria no comprenden sus necesidades.²¹⁰ El 20 % de las personas con discapacidad no visita a un médico debido a los costos, y el 66 % no visita un dentista debido al costo.²¹¹

A las personas con discapacidad intelectual²¹² no se les diagnostica un 42 % de las enfermedades. La formación de la fuerza laboral es inadecuada para abordar las necesidades de atención médica.²¹³

Las mujeres con discapacidad presentan dificultades para acceder a la información y a los servicios de salud, específicamente, a la salud sexual y reproductiva, y a los servicios de detección de cáncer.²¹⁴

Los índices de mortalidad y morbilidad para las personas indígenas con discapacidad son significativamente peores que para las personas no indígenas.²¹⁵

Más de 700 000 australianos presentan enfermedades mentales graves en el curso de un año. Sin embargo, se espera que solo 64 000 personas con discapacidad psicosocial sean elegibles para los paquetes individuales del NDIS.²¹⁶ Los servicios de salud mental tienen recursos significativamente bajos.

Las personas con discapacidad sufren violaciones a los derechos humanos que dan como resultado malos tratos, tales como tratamientos médicos e intervenciones forzosas; privación de la libertad; prácticas represivas; denegación del derecho a la capacidad jurídica; y cualquier otra forma de violencia.²¹⁷

No existe un mecanismo nacional que permita recopilar datos sobre la salud de las personas con discapacidad.²¹⁸ Hay una falta de disponibilidad de datos administrativos sobre el uso de los servicios de salud comunes por parte de las personas con discapacidad. Muchos datos recopilados relacionados con la salud²¹⁹ no incluyen ninguna manera de verificar si una persona tiene una discapacidad.²²⁰

Recomendaciones

Que Australia:

- Implemente medidas para abordar los deficientes resultados con respecto a la salud de las personas con discapacidad, focalizándose específicamente en las personas indígenas con discapacidad, en las personas con discapacidad intelectual, en las personas con discapacidad psicosocial y en las mujeres con discapacidad.
- Financie la creación de una red nacional de especialistas sanitarios en discapacidad intelectual para mejorar la capacidad de los servicios comunes, de modo que satisfagan las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual.
- Aumente la financiación de los servicios y programas compartidos de salud mental, que garanticen alternativas al confinamiento y a los tratamientos forzosos y que apoyen a las personas con discapacidad psicosocial, independientemente de la elegibilidad del NDIS.
- Elabore un mecanismo nacional que permita recopilar datos desglosados sobre la salud de las personas con discapacidad.

Acceso a la habilitación y rehabilitación (artículo 26)

28(a) La implementación del NDIS está cambiando significativamente la forma en la que las personas con discapacidad acceden a los servicios. Sin embargo, la falta de claridad y de una interrelación eficaz entre el NDIS y los sistemas de servicios comunes han generado impedimentos artificiales que se interponen activamente para evitar la prestación de un cuidado integrado y holístico para las personas con discapacidad, entre los que se incluyen la ayuda para la habilitación y la rehabilitación.²²¹

El traslado de los programas estatales, territoriales y del *Commonwealth* al NDIS contribuye a la carencia de servicios y a una disminución de los servicios de tratamiento basados en la comunidad, específicamente para las personas que no son elegibles para el NDIS.²²²

Las interacciones entre el NDIS y los servicios comunes están regidas por los *Principios para Determinar las Responsabilidades del NDIS y de otros Sistemas de Servicios*.²²³ Sin embargo, los Principios están sujetos a la interpretación y no son claros. Esto da como resultado temas de limitaciones y disputas sobre la financiación que pueden redundar en un menor acceso o a la imposibilidad de acceder a los servicios tanto para los participantes del NDIS como para las personas con discapacidad que no son elegibles para el NDIS.²²⁴ A pesar de que los Principios permiten brindar apoyos para la discapacidad a las personas con discapacidad [que están] en las cárceles y en detención forense, aún existe una incertidumbre sobre cómo, o si, se brindará apoyo a esta prestación.

La focalización en el diagnóstico permanente descalifica para el NDIS a muchas personas con discapacidad.²²⁵ Las personas con discapacidad sostienen que el énfasis se debe poner en la evaluación de la capacidad funcional y las necesidades para determinar la elegibilidad.²²⁶

El acceso al NDIS representa una oportunidad para disminuir las tasas de encarcelación para las personas con una deficiencia cognitiva o psicosocial, específicamente para las personas indígenas con discapacidad, representadas desproporcionadamente en prisión. Sin embargo, el NDIS se suspende cuando una persona está detenida,²²⁷ lo que le niega el apoyo para habilitación o rehabilitación para ayudarla a reintegrarse a la comunidad.

En Australia, se permite el tratamiento forzoso según las leyes de tutela y de salud mental.

Recomendaciones

Que Australia:

- Garantice que las personas con discapacidad [que están] en prisión y en otras formas de detención puedan utilizar su paquete del NDIS mientras están encarcelados o detenidos.
- Modifique la legislación del NDIS para abordar las disposiciones de permanencia para la elegibilidad del NDIS y asegure que las evaluaciones se basen en la capacidad funcional y en las necesidades en lugar de que se basen en el diagnóstico médico.

Derecho al trabajo (artículo 27)

29. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad se duplica con respecto a la población general.²²⁸ La cantidad de personas con discapacidad en la fuerza laboral ha descendido un 3,0 % en la última década.²²⁹ Simultáneamente, la cantidad de personas con discapacidad en edad laboral que participan de la fuerza laboral aumentó en un 23 %.²³⁰ Solo el 9 % de las personas con discapacidad manifiestan que tienen las mismas oportunidades de empleo que las otras personas.²³¹ Las quejas sobre discriminación en el empleo representan un porcentaje importante de todas las quejas sobre discriminación por discapacidad presentadas ante los organismos contra la discriminación en Australia.²³²
- La revisión del Marco Nacional de Empleo se redujo considerablemente y solo se concentra en el programa de Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad (DES) y no se pudo realizar la reforma integral necesaria. Los *Servicios de Empleo para Personas con Discapacidad (DES)*²³³ siguen dando resultados deficientes para las personas con discapacidad.²³⁴
- 29(a) La estructura laboral segregada para las personas con discapacidad a través de las Empresas Australianas para Personas con Discapacidad (ADE) sigue disponible en Australia y le permite a los empleadores pagarle sueldos más bajos a las personas con discapacidad que a otras personas;²³⁵ además, menos de un 1 % tienen oportunidades de cambiarse a un empleo convencional.
- Si bien el BSWAT se ha suspendido, hay una cantidad de herramientas similares de evaluación de sueldos discriminatorios que no se están utilizando. *La Ley sobre el Programa de Pago que utiliza la Herramienta para el Cálculo de Salarios en Servicios Comerciales (BSWAT) de 2015*²³⁶ entregó un pago único de \$100 o más en ciertas circunstancias a los empleados de ADE elegibles que tenían una discapacidad intelectual.²³⁷ Sin embargo, el Programa finalizó en 2018, no se aplica a todos los empleados de ADE y no abarca a las personas con discapacidad a las que se les pagó según el BSWAT después de 2014.
- 29(b) El *Sistema de Salario Respaldado (SWS)*²³⁸ aún contempla que a las personas con discapacidad se les pague un porcentaje prorata del salario mínimo para la industria según la evaluación de su capacidad.
- 29(c) Durante las últimas décadas, no hubo una mejora en la participación de la fuerza laboral de las mujeres con discapacidad.²³⁹ Los hombres con discapacidad tienen muchas más posibilidades de empleo que las mujeres con discapacidad.²⁴⁰ No hay políticas o programas que aborden la falta de participación en el empleo de mujeres con discapacidad, lo que incluye el abordaje de las barreras estructurales para su participación en la fuerza laboral.
30. No se han implementado las recomendaciones del informe *Deseo Trabajar* de 2016.²⁴¹ La Encuesta hizo recomendaciones relativas a la legislación y a las acciones de la *Commonwealth* que se podrían tomar [en cuenta] para abordar la discriminación en el empleo.

Recomendaciones

Que Australia:

- Desarrolle una estrategia nacional de empleo para las personas con discapacidad que incorpore las recomendaciones de la Encuesta Deseo Trabajar y que contenga medidas enfocadas en el género para aumentar la participación de las personas con discapacidad en la fuerza laboral, que incluya abordar las barreras estructurales de empleo.
- Implemente acciones para realizar la transición de un empleo segregado a una formación para [obtener] trabajo genuino y a oportunidades que generen habilidades que le abran el camino a un empleo común y a una remuneración equitativa por el trabajo.
- Empee medidas para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de empleo que satisfagan sus necesidades personales y que se enfoquen en los resultados a largo plazo.

Nivel de vida adecuado y protección social (artículo 28)

31. El 45 por ciento de las personas con discapacidad en Australia vive en la pobreza.²⁴² Un 11,2 % de las personas con discapacidad sufren desventajas profundas y persistentes, más del doble que la frecuencia nacional.²⁴³ Este índice es significativamente mayor para las personas indígenas con discapacidad. El 61 % de las personas con discapacidad no pueden cubrir las necesidades básicas con su ingreso actual.²⁴⁴

Las pensiones del Gobierno son la fuente principal del ingreso personal para el 42 % de las personas con discapacidad en edad laboral.²⁴⁵ En comparación, el sueldo o el salario es la fuente principal del ingreso personal para un 68 % de las personas en edad laboral sin discapacidad.²⁴⁶

El ingreso personal bruto promedio por semana de las personas con discapacidad es la mitad del de las personas sin discapacidad.²⁴⁷ Los sistemas de ingresos, de bienestar e impositivos en Australia no reconocen los costos significativos debidos a la discapacidad en los que incurren las personas con discapacidad durante toda su vida.²⁴⁸

La *Pensión de apoyo por discapacidad* (DSP)²⁴⁹ no es adecuada para apoyar a las personas con discapacidad.²⁵⁰ La elegibilidad de la DSP se ha reducido a tal punto que ahora un 25-30 % de las personas con discapacidad reciben un pago Newstart muy inferior por desempleo,²⁵¹ lo que provoca una mayor pobreza arraigada. El índice de reclamos exitosos por DSP ha disminuido considerablemente, de un 69 % en 2011 a un 29,8 % en 2018.²⁵² Mientras que los gobiernos han reducido de manera significativa la cantidad de personas que reciben la DSP, esto no redundó en un aumento del empleo y en una seguridad económica para las personas con discapacidad.²⁵³

Las personas con discapacidad psicosocial componen el grupo de clientes con crecimiento más rápido en la población de Servicios Especializados para los Desamparados;²⁵⁴ la tasa de uso del servicio se duplicó en los últimos 5 años y la mayoría son mujeres con discapacidad psicosocial.²⁵⁵ La violencia familiar y la discapacidad psicosocial son ahora las causas más comunes para los desamparados en Australia.²⁵⁶

A nivel nacional, en junio de 2018, el porcentaje de la capacidad ocupada de alquiler era de un 97 % para las viviendas públicas.²⁵⁷ Un 29 % de las personas que viven en viviendas de alquiler públicas reciben la DSP²⁵⁸ y gastan un tercio de sus ingresos en gastos de vivienda.²⁵⁹ Casi el 81 % de las personas con discapacidad manifiestan que viven en viviendas públicas de un estándar inaceptable.²⁶⁰ Muchas de las personas con discapacidad no tienen un nivel de vida adecuado como para poder alquilar en el mercado privado o para comprar sus propias viviendas.²⁶¹

Recomendaciones

Que Australia:

- Ponga fin a las restricciones permanentes de elegibilidad continuas para la DSP, aumente la tasa de Newstart y de otros pagos de ayuda económica para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a un nivel de vida adecuado.
- Dé prioridad a la concreción del derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social para las personas indígenas con discapacidad.
- Aborde las causas fundamentales de los desamparados para las personas con discapacidad psicosocial y para las mujeres con discapacidad.

Participación en la vida política y pública (artículo 29)

- 32(a) Las disposiciones de 'mente insana' en la Ley Electoral y en la legislación electoral estadual, territorial del Gobierno local les niegan el derecho a votar a algunas personas con discapacidad, en particular, a las personas con deficiencia cognitiva y con discapacidad psicosocial.²⁶²
- 32(b) El derecho de las personas con discapacidad a votar de manera independiente y en secreto en las elecciones de los gobiernos locales, estaduais/territoriales y federales no es una realidad para muchas personas con discapacidad, debido a la falta de coherencia para contemplar el voto electrónico y barreras arquitectónicas para emitir el sufragio.

Recomendaciones

Que Australia:

- Mantenga el derecho de las personas con discapacidad a votar en las elecciones sobre una base igualitaria con respecto a otras personas eliminando el artículo 93(8) de la Ley Electoral de 1918 (Cth) (disposición de 'mente insana') y promulgue una legislación alternativa que restablezca la presunción de capacidad para votar y ejercer su elección de las personas con discapacidad.

Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31)

- 33(a) No hay medidas uniformes a nivel nacional para recabar e informar de manera pública los datos desglosados en la totalidad de las obligaciones contenidas en la CRPD.
- 33(b) A pesar de las recomendaciones de los organismos de supervisión del tratado de las Naciones Unidas, Australia aún no pidió ni financió una evaluación integral sobre la situación de las mujeres con discapacidad,²⁶³ sobre la situación de los niños y jóvenes con discapacidad²⁶⁴ y sobre la situación de las mujeres indígenas con discapacidad.

La falta de datos desglosados uniformes a nivel nacional²⁶⁵ suscita preocupaciones graves sobre la capacidad de Australia para cumplir con la CRPD y para supervisar y evaluar la implementación de la NDS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Recomendaciones

Que Australia:

- Lleve a cabo una evaluación integral de la situación de las mujeres con discapacidad, de la situación de los niños y jóvenes con discapacidad, y de la situación de las personas indígenas con discapacidad.
- Desarrolle medidas uniformes a nivel nacional para recabar e informar de manera pública los datos desglosados en la totalidad de las obligaciones contenidas en la CRPD.

Cooperación internacional (artículo 32)

34. En el Examen Periódico Universal (2016) Australia asumió el compromiso voluntario²⁶⁶ de avanzar en la *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*²⁶⁷ para su *Desarrollo para Todos: Estrategia 2015-2020*²⁶⁸ y su *Estrategia Internacional para las Personas Indígenas 2015-2019*.²⁶⁹

Una evaluación del *Desarrollo para Todos* [realizada] en 2018 le recomendó a Australia continuar con el compromiso de incluir el desarrollo de la discapacidad inclusiva como un derecho humano y las prioridades de ayuda; además del aprovechamiento de los avances [logrados] hasta la fecha. No hay información sobre una tercera propuesta de la *Estrategia de Desarrollo para Todos* para después de 2020.

No hay un mecanismo para la participación de las personas con discapacidad y de las DPO en la aplicación y supervisión de los ODS en Australia.

Recomendaciones

Que Australia:

- Establezca un mecanismo formal para la participación de las personas con discapacidad en la aplicación y supervisión de la CRPD y de los ODS.

Aplicación y supervisión nacional (artículo 33)

35. El Departamento de Servicios Sociales (DSS) y el Departamento de la Fiscalía General (AGD) actúan como un 'punto focal conjunto' dentro del Gobierno de Australia para coordinar la implementación de la CRPD.²⁷⁰ Esto reduce, en gran medida, la implementación de la NDS, que cuenta con escasos recursos y con medidas deficientes. Las recomendaciones de las revisiones de supervisión del tratado de las Naciones Unidas con respecto a los derechos de las personas con discapacidad no están incorporadas a las acciones concretas dentro de los marcos legislativos y políticos, que incluye a la NDS.

El AGD ha desarrollado una página web que supervisa el EPU²⁷¹ y que brinda información sobre el avance en cuanto a las recomendaciones del EPU. El informe del progreso está recopilado a partir de la información brindada por las entidades del Gobierno de Australia, pero no incluye ni información ni participación de las personas con discapacidad.

La Comisión Australiana de Derechos Humanos carece de recursos adecuados para supervisar completamente la implementación de la CRPD.

No hay un mecanismo de participación formal con las DPO o DRO para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la aplicación y supervisión nacional.

Recomendaciones

Que Australia:

- Establezca un mecanismo formal para la participación productiva de las personas con discapacidad en la aplicación y supervisión de la CRPD, así como también en otros tratados sobre derechos humanos y recomendaciones del EPU.
- Que financie adecuadamente a las DPO y DRO para participar en la aplicación y supervisión de la CRPD.

Referencias y notas

- 1 In early-mid 2019, the National Civil Society CRPD Shadow Report Working Group conducted an online survey for people with disability in Australia to provide an additional opportunity to contribute to the development of this Report. More than 1,000 people with disability responded to the Survey, and the findings of the Survey have been incorporated into this Report.
- 2 The [Disability Discrimination Act 1992](#) (Cth) (DDA) makes direct and indirect discrimination on the grounds of disability unlawful in relation to employment, education, access to premises, the provision of goods and services, accommodation, membership of clubs, associations, sports and the administration of Australian Federal laws and programs.
- 3 For example: Victoria, Australian Capital Territory (ACT) and Queensland human rights legislation do not protect economic, social and cultural rights.
- 4 There remain many significant gaps, particularly in relation to fundamental human rights, including freedom from torture and ill-treatment, recognition of legal capacity, institutionalisation, indefinite and arbitrary detention and involuntary treatment.
- 5 UN General Assembly, Human Rights Council Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Australia and the regional processing centres in Nauru; 24 April 2017, UN Doc No. A/HRC/35/25/Add.3. See also: Australian Government, [Australian Government response to the Senate Community Affairs References Committee Reports](#) (May 2015).
- 6 Engagement is usually ad-hoc and/or one-off consultation processes, and do not reflect the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, in the implementation and monitoring of the Convention. See: UN Doc No. CRPD/C/GC/7.
- 7 DPOs and DROs are only funded for a two year period, indexation is not applied to funding and there are restrictions on how this funding can be used. DPO and DRO funding contracts specify that funding cannot be used for international travel, including for CRPD related and other international human rights events.
- 8 [The National Disability Advocacy Program \(NDAP\)](#) provides people with disability with access to effective disability advocacy that promotes, protects and ensures their full and equal enjoyment of all human rights enabling community participation. See also: Australian Department of Social Services (DSS) [Fact Sheet: Disability advocacy and the NDIS](#).
- 9 [The National Disability Insurance Scheme \(NDIS\)](#) is a universal scheme that funds 'reasonable and necessary' supports for Australians with permanent and significant disability, and which is expected to be fully rolled out across Australia by 2020.
- 10 This is particularly the case for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in rural and remote areas.
- 11 The [Productivity Commission](#) is the Australian Government's independent research and advisory body on a range of economic, social and environmental issues affecting the welfare of Australians.
- 12 Productivity Commission (2017) [National Disability Insurance Scheme \(NDIS\) Costs](#), Study Report, Canberra.
- 13 Australian Government, [National Disability Strategy 2010-2020](#). Department of Social Services, Canberra.
- 14 The [National Disability Strategy \(NDS\)](#) sets out goals and objectives under six areas of mainstream and disability-specific public policy. The six areas are: 1) Inclusive and accessible communities; 2) Rights protection, justice and legislation; 3) Economic security; 4) Personal and community support; 5) Learning and skills; and 6) Health and well-being. The NDS is being delivered in three phases through the following four-year implementation plans: 'Laying the Groundwork' (2011-2014) set the foundation for each State and Territory Government to have its own disability plan to improve outcomes through mainstream policies, programs, services and infrastructure. 'Driving Action' (2015-2018) outlines new priority actions as well as ongoing commitments to consolidate actions that are driving improved outcomes and identify where more effort is needed. Measuring Progress (2019-2022) will identify new and emerging outcomes to be implemented in order to ensure the objectives of the NDS are met.
- 15 Commonwealth of Australia, National Disability Strategy Implementation Plan, 'Measuring Progress (2019-2020)'.
- 16 Commonwealth of Australia (2017) Senate Standing Committee on Community Affairs, Report: [Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities](#).
- 17 Women with Disabilities Australia (WWDA), (2014) ['Gender Blind, Gender Neutral': The effectiveness of the National Disability Strategy in improving the lives of women and girls with disabilities](#). WWDA, Hobart, Tasmania, ISBN: 978-0-9585268-2-1.
- 18 Disabled People's Organisations Australia (DPO Australia) (2017) [Submission to the Senate Community Affairs References Committee Inquiry into the delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020](#) (NDS).
- 19 Commonwealth of Australia (2017) Senate Standing Committee on Community Affairs, Report: [Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities](#).
- 20 Commonwealth of Australia (2018) [Australian Government Response](#) to the Senate Standing Committee on Community Affairs, Report: Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities.
- 21 A person satisfies the [Assessment criteria for the NDIS](#) if: (a) They are under the age of 65; (b) They have a disability that is due to an impairment likely to be permanent and life long; (c) Their impairment substantially reduces their ability to participate effectively in everyday life; (d) They are an Australian citizen or permanent resident; and (e) They require reasonable and necessary supports to live an ordinary life.
- 22 The legislation is not well drafted and has resulted in contradictory interpretations by the NDIA and the Administrative Appeals Tribunal. There is not yet an established body of case law from the Federal Court to provide authoritative guidance on many issues. See the NDIS Act at: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00020>
- 23 At full Scheme, approximately 460,000 people are expected to be supported by the NDIS. People identifying as Aboriginal or Torres Strait Islander make up 5.4% of participants. More than half of NDIS participants (52%) are aged 18 and under; the majority of participants are male (63%). Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW. See also: Productivity Commission (2019), [Report on Government Services 2019](#)
- 24 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#).
- 25 Limited information is publicly available to help Scheme participants and their families, carers and advocates to navigate the planning system.
- 26 Such as their entitlement to request a face to face meeting or have an advocate present during the planning meeting.

27 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#); Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (September 2017) [Progress Report](#).

28 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#).

29 People from CALD backgrounds are 7.7 percent of participants, despite a stated NDIA goal of 20 per cent CALD participants. Aboriginal and Torres Strait Islander people are 5.4 percent of participants or about 9000, despite around 60,000 Aboriginal and Torres Strait Islander people in Australia having a severe or profound disability.

30 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (September 2017) [Progress Report](#).

31 The insufficient funding allocated by the Federal Government for NDIS advocacy has resulted in inequality and significant unmet need. In addition, the paucity of funded advocacy has resulted in a significant rise in fraudulent activities by providers and fee for service for reviews and appeals by the same services creating serious conflicts of interest. See also: Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (September 2017) [Progress Report](#).

32 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#).

33 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.

34 The Federal Government also spent \$3.8 billion less on the NDIS in 2018-19 than they estimated in the previous year's budget.

35 The NDIS rollout has been plagued by issues around participant plans, unrealistic pricing, providers struggling to enter the scheme and a poorly functioning IT system. See: Michael, Luke (3rd April 2019) [Advocates ask, why are NDIS funds not being used to fix the scheme?](#) In ProbonoAustralia. See also: Michael, Luke (28th March 2019) [Advocates fight plan to use surplus NDIS funds to boost budget](#); In ProbonoAustralia. The Australian National Audit Office (ANAO) released an NDIA Performance Report in October 2017. The Australian National Audit Office (ANAO) assessed the effectiveness of controls being implemented and developed by the NDIA to ensure Scheme access decisions are consistent with legislative and other requirements. The Audit found among other things, that, while the NDIA had implemented some controls, these were inconsistently applied, data integrity and reporting issues had limited the Agency's ability to monitor training completion by decision-makers, and the access process was not well supported by ICT systems. See: Australian National Audit Office (ANAO) (October 2017), [Decision-making Controls for Sustainability - NDIS Access](#).

36 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (September 2018) [Market readiness for provision of services under the NDIS](#).

37 Disabled People's Organisations Australia, "Building a Disability Inclusive Australia", [Election Policy Platform 2016](#)

38 The National Mental Health Commission's report on Mental Health Programs and Services estimated that about 700,000 Australians experience a severe mental illness in any one year. According to the NDIA, about 64 000 people with primary psychosocial disability are expected to be eligible for individual packages in the NDIS at full scheme. See: Productivity Commission, [National Disability Insurance Scheme \(NDIS\) Costs](#), 19 October 2017. A national inquiry undertaken by the Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme in 2018 found that the lack of clarity around eligibility criteria, the apparent reliance on diagnosis rather than functional needs, the absence of a validated assessment tool for planners, and reported lack of skills and expertise of planners in the psychosocial disability field were key contributors to inconsistencies in eligibility and planning outcomes for people with psychosocial disability. See: Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#). See also: National Mental Health Commission (2018) [Monitoring mental health and suicide prevention reform: National Report 2018](#). Published by: National Mental Health Commission, Sydney.

39 Including those not eligible for the NDIS.

40 This has resulted in some quality providers already leaving the market. Some new market entrants and existing providers are exploiting the pricing structure established by the [NDIS Price Guide](#).

41 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (September 2017) [Progress Report](#).

42 The [ILC program](#) is a key component of the NDIS and has been set up to provide information, linkages and referrals to people with disability, their families and carers, with the appropriate community and mainstream supports. Funding for ILC will gradually increase over transition (from \$33 million in 2016-17 to \$131 million in 2019-20). The focus of ILC is on community inclusion.

43 Australia's Productivity Commission has recommended that ILC funding should be increased to the full scheme amount (\$131 million) for each year during the transition and be focused on national ILC activities. See: Productivity Commission, [National Disability Insurance Scheme \(NDIS\) Costs](#), 19 October 2017.

44 The NDIS quarterly reports provide the COAG Disability Reform Council with information (including statistics) about participants in each jurisdiction and the funding or provision of supports by the NDIA in each jurisdiction. Available at: <https://www.ndis.gov.au/about-us/publications/quarterly-reports>

45 Including the numbers of reviews, review timeframes, outcomes of reviews, and participant satisfaction with the review process. See: Productivity Commission, [National Disability Insurance Scheme \(NDIS\) Costs](#), 19 October 2017.

46 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#).

47 National CRPD Survey (2019) Findings.

48 See for example: [Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women \[Australia\]](#) (2010) at para. 25 "The Committee further urges the State party to give due consideration, with a view to further protecting women's human rights, to the adoption of a Human Rights Act encompassing the full range of civil, cultural, economic, political and social rights." UN Doc. No. CEDAW/C/AUS/CO/7.

49 The rights of people with disability to non-discrimination are limited in six key areas: (a) failure to address intersectional discrimination; (b) ineffective complaints process; (c) lack of protection for systemic discrimination; (d) a lack of protection against vilification; (e) exemption clauses that allow discrimination on grounds of disability in migration, insurance and infectious diseases, pensions and allowances and combat and peacekeeping duties; and (f) a lack of community legal education outreach regarding individuals' rights and protections under the DDA, in particular the lack of outreach to Aboriginal and Torres Strait Islander communities and people with disability from non-English speaking backgrounds.

50 Federal Court of Australia, [Sklavos v Australasian College of Dermatologists](#) [2017] FCAFC 128.

51 In late 2018, a number of disability, human rights and community legal centres wrote to the Federal Attorney-General to request an urgent amendment to the DDA to fix the significant problem with the law that stops discrimination in employment, education, transport and more. The response received from the Attorney-General noted that this was not a priority for the Government. See: People With Disability Australia (PWDA) (February 2019) [Federal Government Must Fix Gaping Hole In The Disability Discrimination Act](#).

- 52 See: UN Doc. CRPD/C/AUS/CO/1. See also: CRPD General Comment on Women with Disabilities (CRPD/C/GC/3).
- 53 In its 2018 review of Australia's eighth periodic report under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the CEDAW Committee expressed its concern at the lack of national legislation prohibiting all forms of gender-based violence against women. The CEDAW Committee recommended that the Australian Government: "Adopt commonwealth legislation that is in line with the Convention and prohibits all forms of gender-based violence against women and girls, and shift the power to legislate on this matter to the Commonwealth Parliament" See UN Doc No: CEDAW/C/AUS/CO/8. See also: CCPR/C/AUS/CO/6; E/C.12/AUS/CO/5; CAT/C/AUS/CO/4-5.
- 54 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (14 July 2017); General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19. UN Doc No: CEDAW/C/GC/35.
- 55 Council of Australian Governments (2011) [National Plan to Reduce Violence against Women and their Children 2010-2022](#), Canberra.
- 56 The exclusion and neglect of women and girls with disability in the [National Plan](#) has been identified in a number of reviews and inquiries at both national and international levels. For example, the report from the [Senate Inquiry into Violence, abuse and neglect against people with disability in institutional and residential settings](#), released in November 2015, recommended that the Australian Government amend the National Plan to ensure that women with disability are afforded the full range of rights protections that are available to women without disability. The recommendation also specified that the National Plan must be updated to include institutional and disability accommodation settings, and that in order to give effect to the National Plan, there must be increased funding to support women with disability escaping domestic violence.
- 57 Such as forced sterilisation, forced abortion, forced contraception, denial of legal capacity, forced treatment, restrictive practices, seclusion, restraint, indefinite detention, and forced and coerced marriage.
- 58 Including for eg: prisons, segregated settings, detention centres, and other forms of institutional settings.
- 59 See: [1800RESPECT](#); See also [The Line](#).
- 60 The Australian Government cites the [Personal Safety Survey \(PSS\)](#) as "the most comprehensive prevalence data source available in Australia". The PSS is a national survey conducted by the [Australian Bureau of Statistics \(ABS\)](#). The PSS collects detailed information from men and women about the nature of violence experienced since the age of 15. However, it is widely recognised that the PSS has significant methodological restrictions and limitations. For example, the PSS systematically excludes people with disability living in institutional settings (i.e. not in a private home), and those who live in remote areas, where Aboriginal and Torres Strait Islander people with disability are over-represented. The [National Aboriginal and Torres Strait Islander Social Survey \(NATSISS\)](#) also operates within these sampling parameters. The PSS data collection methods do not involve inclusive research practices. The PSS is performed by an interviewer and a specific requirement of the survey is that all interviews are conducted alone in a private setting. Interpreters and support persons are excluded, and where a respondent requires the assistance of another person to communicate with the interviewer, the interview is not conducted. See: (<http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4906.0Explanatory%20Notes12012?OpenDocument>). These methodological restrictions mean that the PSS not only misses (and excludes) a very significant proportion of people with disability, but it also means that reported data from the PSS relating to women with disability is inherently misleading.
- 61 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW. See also: Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 62 See: [1800RESPECT](#)
- 63 Women With Disabilities Australia (WWDA) (August 2016) '[Improving Service Responses for Women with Disability Experiencing Violence](#)': [Final Report](#). WWDA, Hobart, Tasmania. ISBN: 978-0-9585268-5-2.
- 64 See for eg: <https://www.1800respect.org.au/sunny/> <https://www.dvalert.org.au/education-and-training/2-day-workshops/disabilities-workshops> <https://www.anrows.org.au/project/evaluation-of-the-1800respect-disability-referral-pathways-project/>
- 65 For example: [Medibank Health Solutions, e-safety Commission](#)
- 66 A significant majority of domestic violence shelters are not accessible for women or children with disability, and there are additional barriers where there are also language or cultural requirements.
- 67 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, in the implementation and monitoring of the Convention, UN Doc No. CRPD/C/GC/7.
- 68 See: United Nations General Assembly (2017); Pillar one: advance the rights of women and girls; [Note verbale dated 14 July 2017 from the Permanent Mission of Australia to the United Nations addressed to the President of the General Assembly](#); 24 July 2017; UN Doc. No: A/72/212.
- 69 Department of Social Services 2014, [National Framework for Protecting Australia's Children, 2009-2020](#), Commonwealth of Australia, Canberra, viewed 29 July 2014.
- 70 Robinson 2012, [Enabling and Protecting: Proactive approaches to addressing the abuse and neglect of children and young people with disability](#), p. 12; Children and Young People with Disability Australia, Melbourne.
- 71 As of February 2019, the [National Principles for Child Safe Organisations](#) have been endorsed by members of the Council of Australian Governments, including the Prime Minister and state and territory First Ministers. The principles aim to provide a nationally consistent approach to creating organisational cultures that foster child safety and wellbeing.
- 72 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW
- 73 Even where services are available, parents may have to deal with as many as six or seven different government departments during the early years of the life of the child. Many parents are reluctant to seek assistance from the service sector because of lack of trust and the trauma resulting from the well-documented removal of children from Aboriginal families. See for eg: Disability Rights Now (2012) CRPD Civil Society Report on Australia. Available at: <https://pwd.org.au/our-work/human-rights-campaigns/united-nations-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/crpd-civil-society-shadow-report>
- 74 See: International Day of People with Disability, [Former National Disability Awards](#)
- 75 People with disability and their representative organisations subsequently conducted their own online Awards with minimal resources and tight timeframes. See: [National Awards for Disability Leadership](#).
- 76 'Ramp Up', a portal on the ABC website specifically dedicated to disability issues, was de-commissioned in late 2014. See archived site at: <http://www.abc.net.au/rampup/>
- 77 Department of Social Services (DSS) [National Disability Strategy, Second Implementation Plan: Driving Action 2015-2018](#).

78 The four 'priority areas' of the National Disability Strategy Second Implementation Plan (2015–2018) are: 1) NDIS transition to full scheme; 2) improving employment outcomes for people with disability 3) improving outcomes for Aboriginal and Torres Strait Islander people with disability; 4) communication activities to promote the intent of the strategy throughout the community. It also prioritises the development of an 'Australian Government Action Plan' to drive implementation of the NDS across Commonwealth portfolios between 2015 and 2018. See: Department of Social Services (DSS) [National Disability Strategy, Second Implementation Plan: Driving Action 2015–2018](#).

79 Davy, L., Fisher, K.R., Wehbe, A., Purcal, C., Robinson, S., Kayess, R., Santos, D. (2019). [Review of implementation of the National Disability Strategy 2010-2020: Final report](#). (SPRC Report [4/19]). Sydney: Social Policy Research Centre, UNSW Sydney.

80 The [Disability Standards for Accessible Public Transport 2002](#) (Transport Standards) seek to provide certainty to providers and operators of public transport services and infrastructure about their responsibilities under the Disability Discrimination Act (DDA). These standards are subject to a statutory five-yearly review. Recommendations from these reviews are not implemented or consistent; there is no coordinated mechanism for monitoring the implementation of the standards; and there is a lack of enforcement of compliance with the standards

81 In the absence of a national reporting framework, it is difficult to monitor the effectiveness of the Standards and enforce compliance targets.

82 People with disability are often forced to shoulder the financial burden of inaccessible public transport by using taxis or expensive private transport options. Changes to the mobility allowance under the NDIS have exacerbated this burden. See: Senate Standing Committee on Community Affairs (29 November 2017) [Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities](#). Commonwealth of Australia.

83 Australian Government (April 2016) [Review of the Disability \(Access to Premises –Buildings\) Standards 2010 First Review](#), Department of Industry, Innovation and Science.

84 Senate Standing Committee on Community Affairs (29 November 2017) [Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities](#). Commonwealth of Australia.

85 The [National Standards for Disability Services](#) (2013) cover Disability Advocacy and Employment Services.

86 Australian Government, [Quality Assurance for Disability Advocacy and Employment Services](#). Department of Social Services

87 Disabled People's Organisations Australia, "Building a Disability Inclusive Australia", [Election Policy Platform 2016](#)

88 Senate Standing Committee on Community Affairs (29 November 2017) [Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities](#). Commonwealth of Australia.

89 Australian Government, [Livable Housing Design Guidelines](#), Department of Social Services.

90 Australian Government, [Livable Housing Design Guidelines](#), Department of Social Services.

91 This is due to the voluntary nature of the target and the number of compliant houses currently being produced. See: Senate Standing Committee on Community Affairs (29 November 2017) [Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities](#). Commonwealth of Australia.

92 The Building Code of Australia, in conjunction with the Plumbing Code of Australia, forms the [National Construction Code](#) issued by Australian Building Codes Board.

93 Australian Government (2016) National Disability Strategy 2010-2020: Progress Report to COAG.

94 Disability Rights Now (2012) [CRPD Civil Society Report on Australia](#).

95 Australian Bureau of Statistics, 4430.0 - Disability, Ageing and Carers, Australia: Summary of Findings, 2015: [Aboriginal and Torres Strait Islander People with Disability](#).

96 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

97 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

98 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

99 Dudgeon, P., Hirvonen, T. & McPhee, R. (March 29, 2019) [Why are we losing so many Indigenous children to suicide?](#) The Conversation.

100 Australian Bureau of Statistics, 3303.0 - Causes of Death, Australia, 2017: [Intentional self-harm in Aboriginal and Torres Strait Islander People](#). See also: Aubusson, K. (March 20, 2019) [Leaders urged to declare Aboriginal child suicides a 'national crisis'](#). The Sydney Morning Herald.

101 Australian Bureau of Statistics, 3303.0 - Causes of Death, Australia, 2015: [Australia's Leading Causes of Death, 2015](#). See also: Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW. See also: Lifeline, [Statistics on Suicide in Australia](#).

102 Lifeline, [Statistics on Suicide in Australia](#).

103 The suicide rate amongst Aboriginal and Torres Strait Islander peoples is more than double the national rate. In 2015, suicide accounted for 5.2% of all Indigenous deaths compared to 1.8% for non-Indigenous people. See: Lifeline, [Statistics on Suicide in Australia](#).

104 National Survey on the CRPD, (2019) Findings.

105 Worthington, E. (2017) [People with intellectual disabilities twice as likely to suffer preventable death, study finds](#). ABC News.

106 Worthington, E. (2017) [People with intellectual disabilities twice as likely to suffer preventable death, study finds](#). ABC News.

107 See: Office of the Public Advocate (February 2016) [Upholding the right to life and health: A review of the deaths in care of people with disability in Queensland](#). See also: NSW Ombudsman (2018) [Report of Reviewable Deaths in: 2014 and 2015, 2016 and 2017, Deaths of people with disability in residential care](#). NSW Ombudsman, Sydney.

108 There has been insufficient attention to engaging with people with disability about their functional capabilities and support needs in emergency situations. While the Australian Accessible Emergency Response System ensures any emergency messages issued during an emergency are accompanied by messages in Auslan for people who are deaf or hearing-impaired, they do not include messages with audio description for people who are vision impaired. See: Australian Blindness Forum, cited in Senate Standing Committee on Community Affairs (29 November 2017) [Delivery of outcomes under the National Disability Strategy 2010-2020 to build inclusive and accessible communities](#). Commonwealth of Australia.

109 The [Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030](#) (Sendai Framework) is the first major agreement of the post-2015 development agenda, with seven targets and four priorities for action. It was endorsed by the UN General Assembly following the 2015 Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR).

- 110 See: Commonwealth of Australia 2018, [National Disaster Risk Reduction Framework](#).
- 111 Sweet, M. (14 May 2019) [Inequality and climate change: the perfect storm threatening the health of Australia's poorest](#). The Guardian.
- 112 Australian Law Reform Commission, [Equality, Capacity and Disability in Commonwealth Laws](#) (ALRC Report 124); tabled on 24 November 2014.
- 113 Including guardianship and administration laws.
- 114 Disability Rights Now (2012) [CRPD Civil Society Report on Australia](#).
- 115 Productivity Commission, [Report on Government Services 2019](#), Chapter 17: Youth justice services.
- 116 Since 2004 there has been a 95% increase in the number of Aboriginal and Torres Strait Islander people in custody. 27% of the total prison population are Aboriginal and Torres Strait Islander people. See: Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW. See also: Australian Institute of Health and Welfare (2019) [The health of Australia's prisoners 2018](#). Cat. no. PHE 246. Canberra: AIHW. See also: Commonwealth of Australia (2013) Senate Legal and Constitutional Affairs References Committee, Report of the Senate Inquiry into '[Value of a justice reinvestment approach to criminal justice in Australia](#)'; See also: Commonwealth of Australia (2016) Senate Standing Committee on Community Affairs, Report: [Indefinite detention of people with cognitive and psychiatric impairment in Australia](#).
- 117 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.
- 118 Australian Institute of Health and Welfare (2019) [The health of Australia's prisoners 2018](#). Cat. no. PHE 246. Canberra: AIHW.
- 119 Australian Institute of Health and Welfare (2019) [The health of Australia's prisoners 2018](#). Cat. no. PHE 246. Canberra: AIHW. See also: Commonwealth of Australia (2013) Senate Legal and Constitutional Affairs References Committee, Report of the Senate Inquiry into '[Value of a justice reinvestment approach to criminal justice in Australia](#)'
- 120 Commonwealth of Australia (2017) Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme; [Provision of services under the NDIS for people with psychosocial disabilities related to a mental health condition](#).
- 121 Commonwealth of Australia (2013) Senate Legal and Constitutional Affairs References Committee, Report of the Senate Inquiry into '[Value of a justice reinvestment approach to criminal justice in Australia](#)'
- 122 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 123 [Lyons v State of Queensland \[2016\] HCA 38](#); See also: Guest, A. (5 Oct 2016) [Deaf jurors serve in US and New Zealand, but High Court blocks Australian Gale Lyons' bid](#). ABC News.
- 124 Disabled People's Organisations Australia (DPOA)(2017) Submission to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities; [List of issues \[Australia\] to be adopted during the 18th Session of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities](#). See also: Disability Rights Now (2012) [CRPD Civil Society Report on Australia](#).
- 125 Australian Law Reform Commission (December 2017) [Pathways to Justice - An Inquiry into the Incarceration Rate of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples. Final Report](#). ALRC Report 133.
- 126 Australia has not withdrawn nor repealed legislation, policies and practices that allow for arbitrary and indefinite detention of people with disability, including those deemed unfit to plead.
- 127 Commonwealth of Australia (2016) Senate Standing Committee on Community Affairs, Report: [Indefinite detention of people with cognitive and psychiatric impairment in Australia](#).
- 128 Commonwealth of Australia (2016) Senate Standing Committee on Community Affairs, Report: [Indefinite detention of people with cognitive and psychiatric impairment in Australia](#).
- 129 See: [Australia's Universal Periodic Review](#); Attorney-General's Department.
- 130 See: Human Rights Law Centre, Australia's 2nd Universal Periodic Review: [Voluntary Commitments](#). See also: Law Council of Australia, [Australia's International Human Rights Obligations](#).
- 131 The former Law, Crime and Community Safety Council (LCCSC) consisted of ministers with responsibilities for law and justice, police and emergency management. As a result of a Council of Australian Governments (COAG) review conducted in 2016-17, COAG decided to replace the LCCSC with a separate Councils for [Attorneys-General](#), and a separate Council for [Police and Emergency Management](#).
- 132 Disability Rights Now (2012) [CRPD Civil Society Report on Australia](#).
- 133 Commonwealth of Australia (2016) Senate Standing Committee on Community Affairs, Report: [Indefinite detention of people with cognitive and psychiatric impairment in Australia](#).
- 134 For a discussion on Psychotropic polypharmacy in people with disability, see: Victorian Department of Human Services (2010) [Disability, mental health and medication: Implications for practice and policy](#). A report prepared for the Office of the Senior Practitioner by: Dr Stuart Thomas, Kaisha Corkery-Lavender, Dr Michael Daffern, Dr Danny Sullivan; Centre for Forensic Behavioural Science, School of Psychology & Psychiatry, Monash University, Australia. See also: Dillon, M. (22 Feb 2019) [What have we heard at the Royal Commission into Aged Care Quality and Safety so far?](#) ABC News.
- 135 Willacy, M. & and Blucher, A. (18 Jun 2019) [Boy kept 'completely naked' in Brisbane watch house for days](#). ABC Investigations.
- 136 See: Frohmader, C., & Sands, T. (2015) Australian Cross Disability Alliance (ACDA) [Submission to the Senate Inquiry into Violence, abuse and neglect against people with disability in institutional and residential settings](#). Australian Cross Disability Alliance (ACDA); Sydney, Australia.
- 137 Australian Government, [National Framework for Reducing and Eliminating the Use of Restrictive Practices in the Disability Service Sector](#). Department of Social Services.
- 138 National Disability Insurance Scheme ([Restrictive Practices and Behaviour Support](#)) Rules 2018
- 139 The Framework only applies to disability services and the NDIS (Restrictive Practice and Behaviour Support) Rules 2018 only apply to NDIS participants.
- 140 States and Territories will have NPM bodies for their respective jurisdictions.
- 141 Such as prisons, juvenile detention, police cells, closed psychiatric institutions and immigration facilities.

- 142 Disabled People's Organisations Australia (DPOA), [Position Paper: Disability Inclusive National Preventive Mechanism \(NPM\)](#). DPOA, Sydney.
- 143 See: CAT/C/AUS/CO/4-5.
- 144 [Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability](#).
- 145 Reflecting Australia's obligations under the international human rights treaties to which Australia is a party, and the United Nations '[Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law](#)', remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim's right to the following as provided for under international law: (a) Equal and effective access to justice; (b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; (c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms. UN Doc. No A/RES/60/147.
- 146 See: Frohmader, C., & Sands, T. (2015) Australian Cross Disability Alliance (ACDA) [Submission to the Senate Inquiry into Violence, abuse and neglect against people with disability in institutional and residential settings](#)'. Australian Cross Disability Alliance (ACDA); Sydney, Australia.
- 147 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 148 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 149 National Disability Insurance Scheme (NDIS) [Quality and Safeguards Commission](#)
- 150 Including for example: e.g. allegations of abuse and neglect, unauthorised use of a restrictive practice, serious injury, and sexual misconduct.
- 151 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#).
- 152 People With Disability Australia, Submission No 50 to Senate Standing Committee on Community Affairs, The Involuntary or Coerced Sterilisation of People with Disabilities in Australia, March 2013; Women With Disabilities Australia, Submission No 49 to Senate Standing Committee on Community Affairs, The Involuntary or Coerced Sterilisation of People with Disabilities in Australia, March 2013. Submissions available at: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Community_Affairs/Involuntary_Sterilisation/Submissions
- 153 See: CRC/C/15/Add.268; CRC/C/AUS/CO/4; A/HRC/17/10; CEDAW/C/AUL/CO/7; CAT/C/AUS/CO/4-5; A/HRC/WG.6/10/L.8; CRPD/C/AUS/CO/1; A/HRC/31/14; A/HRC/22/53; CCPR/C/AUS/Q/6; FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics), [Female Contraceptive Sterilization](#). See also: World Medical Association (WMA) in conjunction with the International Federation of Health and Human Rights Organizations (IFHHRO) (2011) [Global Bodies call for end to Forced Sterilization: Press Release](#), 5 September 2011.
- 154 See for eg: Committee on the Elimination of Discrimination against Women (1991) General recommendation No. 18: Disabled women. UN Doc. No. A/46/38.
- 155 Australian Government (May 2015), [Australian Government response](#) to the Senate Standing Committee on Community Affairs Reports: [The involuntary or coerced sterilisation of people with disabilities in Australia](#) (17 July 2013) and the [Involuntary or coerced sterilisation of intersex people in Australia](#) (25 October 2013).
- 156 Australian Governments remain of the view that it is an acceptable practice to sterilise children and adults with disability, provided that they 'lack capacity' and that the procedure is in their 'best interest', as determined by a third party. See: Senate Standing Committee on Community Affairs, (17 July 2013) [The involuntary or coerced sterilisation of people with disabilities in Australia](#)
- 157 Forced contraception is commonly used on women and girls with disability to suppress menstruation or sexual expression for various purposes, including eugenics-based practices of population control, menstrual management and personal care, and pregnancy prevention, including pregnancy that results from sexual abuse. It is a practice widely used in group homes and other forms of institutional settings, and is often justified as a way of reducing the 'burden' on staff/carers who have to 'deal with' managing menstruation of disabled women and girls. In the case of persons with intellectual disability, the decision about type of contraception is almost exclusively made by someone else, such as a doctor and/or guardian, parent, or carer.
- 158 Joint statement by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW): [Guaranteeing sexual and reproductive health and rights for all women, in particular women with disabilities](#). 29 August 2018.
- 159 See: The Darlington Statement [para 7] [Darlington Statement](#): Joint consensus statement from the intersex community retreat in Darlington, March 2017.
- 160 Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2016), General Comment No. 3: Women and Girls with Disabilities, UN Doc. CRPD/C/GC/6, para 32.
- 161 Senate Standing Committee on Community Affairs (25 October 2013) [Involuntary or coerced sterilisation of intersex people in Australia](#)
- 162 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2018) Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Australia, UN Doc, CEDAW/C/AUS/CO/8, para 26.
- 163 UN General Assembly (24 April 2017) [Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Australia and the regional processing centres in Nauru](#). UN Doc. No. A/HRC/35/25/Add.3.
- 164 This devalues the important economic and social contributions that migrants and refugees with disability and their families might make to Australia See: National Ethnic Disability Alliance (NEDA) (2009) [No Right to Discriminate: Submission to the Joint Standing Committee on Migration Inquiry into Immigration Treatment of Disability](#).
- 165 UN General Assembly (24 April 2017) [Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Australia and the regional processing centres in Nauru](#). UN Doc. No. A/HRC/35/25/Add.3.
- 166 beginning from the date the person starts residing in Australia as a permanent visa holder
- 167 Legislation permits children with disability from asylum seeker backgrounds to be held indefinitely in immigration detention facilities. UN General Assembly (24 April 2017) [Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Australia and the regional processing centres in Nauru](#). UN Doc. No. A/HRC/35/25/Add.3.
- 168 Which is directly attributed to the harsh conditions, the protracted periods of closed detention, sexual and other forms of violence, overcrowding, inadequate health care, and fear for and about the future. See: Disabled People's Organisations Australia (DPOA)(2017) Submission to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities; [List of issues \[Australia\] to be adopted during the 18th Session of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities](#).

- 169 UN General Assembly (24 April 2017) [Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Australia and the regional processing centres in Nauru](#). UN Doc. No. A/HRC/35/25/Add.3.
- 170 UN General Assembly (24 April 2017) [Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants on his mission to Australia and the regional processing centres in Nauru](#). UN Doc. No. A/HRC/35/25/Add.3.
- 171 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW. See also: Australian Government, [Australia's Combined Second and Third Periodic Report under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities](#), 1 September 2018.
- 172 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW. See also: Australian Government, [Australia's Combined Second and Third Periodic Report under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities](#), 1 September 2018.
- 173 NSW Ombudsman (2018) [Report of Reviewable Deaths in: 2014 and 2015, 2016 and 2017, Deaths of people with disability in residential care](#). NSW Ombudsman, Sydney.
- 174 For eg: In June 2015, there were 6,252 young people in nursing homes around Australia, comprising of 555 young people aged 0-49 years and 5,697 aged 50-64 years. See: Senate Community Affairs References Committee (2015) [Adequacy of existing residential care arrangements available for young people with severe physical, mental or intellectual disabilities in Australia](#). See also: Norman, J. (24 Mar 2019) [The young people forced to live in aged care homes and the push to get them out](#). ABC News.
- 175 Including the right to choose freely where and with whom they live.
- 176 Aged Care Guide, [The issue facing younger people with disability in aged care](#).
- 177 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 178 For example: The Joint Standing Committee on the NDIS recommended greater regulation to ensure all new housing is compliant with an updated Building Code of Australia. See: Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (May 2016) [Accommodation for people with disabilities and the NDIS](#).
- 179 Supported Independent Living (SIL) under the NDIS is ingraining an institutionalised approach, undermining the NDIS vision of choice and control. See also: Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (May 2016) [Accommodation for people with disabilities and the NDIS](#).
- 180 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 181 Productivity Commission, [Report on Government Services 2019](#)
- 182 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 183 Productivity Commission, [Report on Government Services 2019](#)
- 184 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 185 Reasons include lack of access to services, inaccessibility of public transport, lack of support from airline staff when flying, and international travel restrictions for those on the DSP. National CRPD Survey (2019) Findings.
- 186 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 187 Although the Australian Government has developed the [Digital Service Standard](#), this is a set of best-practice principles for designing and delivering digital government services and does not apply to state, territory or local government services.
- 188 For example, in addition to WCAG 2.0 adherence, web content should include Easy English, Large Print, Rich Text Format, Auslan, audio and other community languages.
- 189 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 190 This happens in two main ways: a) the child is removed by child protection authorities and placed in foster or kinship care; and b) a Court, under the Family Law Act, may order that a child be raised by the other parent who does not have a disability or by members of the child's extended family. See: Victorian Office of the Public Advocate (OPA) (2012) [OPA Position Statement: The removal of children from their parent with a disability](#)
- 191 For eg: Approximately one in six children in alternative or out of home care has a parent with disability. See: [Australian NGO Coalition Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights](#) (May 2017). In addition, in some jurisdictions engaging in sexual relations with a person with intellectual is a criminal offence (eg s 216 Criminal Code (Qld)).
- 192 The Australian Council of Human Rights Authorities (ACHRA), comprises the State, Territory and Federal human rights and discrimination authorities. Over 6 years ago, ACHRA identified discrimination against 'potential and actual parents with disability' as one of three most urgent and pressing human rights issues in Australia today. The Communiqué from the ACHRA 2013 annual meeting stated: "Finally, having regard to evidence: (a) that parents with disability are significantly overrepresented in child protection systems in Australia despite having the same capacity to be effective parents; (b) that there is a lack of systematic data collection and analysis; (c) that there is a lack of appropriate supports to potential and actual parents with disability, - ACHRA calls for better data collection and better research into negative presumptions being made about people with disabilities being able to effectively parent. ACHRA calls for better support for these parents to fulfil their parenting roles and has identified that this as a priority given the discriminatory impact of negative presumptions." See: [Australian Council of Human Rights \(ACHRA\) Communiqué from Australian Council of Human Rights Agencies meeting, 18-19 March 2013](#). There are few long-term and intensive parenting support programs for parents with disability, despite indications that these programs are very successful. See: [Australian NGO Coalition Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights](#) (May 2017). See also: Victorian Office of the Public Advocate (OPA) (2012) [OPA Position Statement: The removal of children from their parent with a disability](#)
- 193 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 194 People with disability in Australia continue to experience, and be at risk of, gross violations of their sexual and reproductive rights including denial of the right to sexual and reproductive autonomy and self-determination, and through practices such as forced sterilisation, forced abortion and forced contraception - often wrongfully justified by theories of incapacity and therapeutic necessity and often performed under the auspices of legitimate medical care or the consent of others in their name. See for eg: Women With Disabilities Australia (WWDA)(2016) ['WWDA Position Statement 4: Sexual and Reproductive Rights'](#). WWDA, Hobart, Tasmania. See also: Frohmader, C., & Sands, T. (2015) Australian Cross Disability Alliance (ACDA) [Submission to the Senate Inquiry into Violence, abuse and neglect against people with disability in institutional and residential settings](#). Australian Cross Disability Alliance (ACDA); Sydney, Australia. See also: Women With Disabilities Australia (WWDA), Human Rights

Watch (HRW), Open Society Foundations, and the International Disability Alliance (IDA) (2011) [Sterilization of Women and Girls with Disabilities: A Briefing Paper](#). See also: International Federation of Gynaecology and Obstetrics (2011) [Female Contraceptive Sterilization](#).

195 Women with disability continue to experience significant discrimination in accessing assisted reproductive technologies, including for eg: in-vitro fertilisation (IVF), assisted insemination, surrogacy, Oocyte cryopreservation. Many women with disability are deemed by fertility clinics as ineligible for assisted reproductive services. Australia's universal health system (Medicare) covers the treatment of assisted reproduction for women who are deemed 'medically infertile', but not for women who are deemed to be 'socially infertile' (including single people and same-sex couples). See: Women With Disabilities Australia (2009): ['Parenting Issues for Women with Disabilities in Australia' - A Policy Paper](#). See also: Fyfe, M. and Davies, J. (6 June 2015) [Motherhood on ice](#); Sydney Morning Herald Good Weekend Magazine. See also: Mather, A. (October 6, 2015) [Motherhood a precious gift many can't afford](#); The Mercury Newspaper.

196 The evidence base describing egregious breaches of the human rights of children and young people with disability in schools is rapidly increasing. See for eg: Children and Young People with Disability Australia (CYDA) (August 2016) [Bullying and abuse of school students with disability at alarming levels: Media Release 9 August 2016](#). See: Australian Broadcasting Corporation (ABC) (16 August 2016) [School investigated after claims boy with autism locked in 'cage'](#). Australian Broadcasting Corporation (ABC) (31 August 2016) [School accused of leaving teen with autism outside on beanbag for whole term](#). The Canberra Times (11 August 2016) [Autism cage details emerge as United Nations investigates abuse of children](#). See also: Senate Community Affairs References Committee (November 2015) [Final Report: 'Violence, abuse and neglect against people with disability in institutional and residential settings'](#). See also: Senate Education and Employment References Committee (2016) [Final Report: Access to real learning: the impact of policy, funding and culture on students with disability](#)

197 See e.g., See: Australian Broadcasting Corporation (ABC) (16 August 2016) [School investigated after claims boy with autism locked in 'cage'](#). Australian Broadcasting Corporation (ABC) (31 August 2016) [School accused of leaving teen with autism outside on beanbag for whole term](#). The Canberra Times (11 August 2016) [Autism cage details emerge as United Nations investigates abuse of children](#).

198 CRPD/G/GC/4

199 Sands, T. (2017), Disabled People's Organisations Australia (DPO Australia) [Submission to the 2017/2018 Federal Budget](#).

200 Students with disability report that their disability is the main reason they do not attend school. See: Australian Institute of Health and Welfare (2017) [Disability in Australia: changes over time in inclusion and participation in education](#). AIHW, Canberra.

201 20% of people with disability attending an educational institution experience discrimination, of which 25% identify a teacher or lecturer as the source of that discrimination. See: Australian Institute of Health and Welfare (2017) [Disability in Australia: changes over time in inclusion and participation in education](#). AIHW, Canberra.

202 See for eg: Children with Disability Australia (CDA) (2013) [Inclusion in education: Towards equality for students with disability](#), Written by Dr Kathy Cologon for CDA. See also: [Australian schools failing children with disabilities. Senate report finds](#); ABC TV (15/01/2016)

203 Australian Institute of Health and Welfare (2017) [Disability in Australia: changes over time in inclusion and participation in education](#). AIHW, Canberra.

204 Although the retention rate to Year 12 for Indigenous students has increased steadily, from 47% in 2010 to 60% in 2016, it is still lower than the non-Indigenous rate (79% in 2010 and 86% in 2016). See: Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW..

205 Schools that only enrol students with special needs. Australian Institute of Health and Welfare (2017) [Disability in Australia: changes over time in inclusion and participation in education](#). AIHW, Canberra.

206 Students with disability at a mainstream school attract a students with disability loading of 186 per cent of the base per student amount; those at a special school attract a students with disability loading of 223 per cent. See: Senate Standing Committees on Education and Employment (15 January 2016) [Chapter 5: How to better support students with disabilities in schools](#) in ['Access to real learning: the impact of policy, funding and culture on students with disability'](#).

207 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the fifth periodic report of Australia, UN Doc E/C.12/AUS/CO/5, paras 55-56.

208 Australia government response to LOIPR, para 275 (b).

209 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

210 National CRPD Survey (2019) Findings.

211 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

212 Approximately 450,000 people in Australia have intellectual disability. See: Council for Intellectual Disability (February 2019) [The Health of People with Intellectual Disability](#).

213 Council for Intellectual Disability (February 2019) [The Health of People with Intellectual Disability](#).

214 For eg: People with disability detained under Forensic Orders are often not provided with access to medical and dental care. See also: Women With Disabilities Australia (WWDA)(2016) ['WWDA Position Statement 4: Sexual and Reproductive Rights'](#). WWDA, Hobart, Tasmania. National CRPD Survey Findings.

215 Indigenous people with disability experience severe levels of psychological distress at a rate three times higher than for non-Indigenous people. See: Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

216 Productivity Commission, [National Disability Insurance Scheme \(NDIS\) Costs](#), 19 October 2017.

217 Including for eg: forced sterilisation, forced abortion, forced contraception; female genital mutilation; menstrual suppression; chemical and physical restraint; forced institutionalisation; forced isolation and segregation; withholding of medications; indefinite detention; forced marriage; sexual slavery. See: Women With Disabilities Australia (WWDA) (August 2016) ['Improving Service Responses for Women with Disability Experiencing Violence': Final Report](#). WWDA, Hobart, Tasmania. ISBN: 978-0-9585268-5-2.

218 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

219 Such as those on hospitals, the Medicare Benefits Schedule, and the Pharmaceutical Benefits Scheme.

220 Australian Institute of Health and Welfare 2018. [Australia's health 2018](#). Australia's health series no. 16. AUS 221. Canberra: AIHW.

221 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (March 2019) [Progress Report](#).

- 222 The lack of community based therapy services seriously inhibits the ability of these services to meet the needs of those needing assistance to improve, maintain or minimise deterioration in their level of functioning.
- 223 Council of Australian Governments; [Principles to Determine the Responsibilities of the NDIS and other Service Systems](#).
- 224 Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme (September 2018) [Market readiness for provision of services under the NDIS](#).
- 225 For example, the NDIS eligibility criteria do not adequately consider the episodic nature of psychosocial disability/mental illness, and the focus on diagnosis rather than physical and psychosocial impact disqualifies many with a demonstrable need for assistance under the Scheme. See: Commonwealth of Australia (2017) Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme; [Provision of services under the NDIS for people with psychosocial disabilities related to a mental health condition](#).
- 226 Commonwealth of Australia (2017) Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme; [Provision of services under the NDIS for people with psychosocial disabilities related to a mental health condition](#).
- 227 Commonwealth of Australia (2017) Joint Standing Committee on the National Disability Insurance Scheme; [Provision of services under the NDIS for people with psychosocial disabilities related to a mental health condition](#).
- 228 39.8% for people with a disability compared to 79.4% for people without a disability. Compared with other OECD countries, Australia has one of the lowest employment participation rates for people with a disability. See: Price Waterhouse Coopers (2011) [Disability Expectations: Investing in a better life, a stronger Australia](#). See also: Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW. Many young people with disability do not enter the labour force over the first seven post-school years and are more likely to experience long-term unemployment than those without a disability. See: Australian Human Rights Commission (2016) [Willing to Work: National Inquiry into Employment Discrimination Against Older Australians and Australians with Disability](#), AHRC, Sydney.
- 229 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 230 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 231 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 232 Australian Human Rights Commission (2016) [Willing to Work: National Inquiry into Employment Discrimination Against Older Australians and Australians with Disability](#), AHRC, Sydney.
- 233 Australian Government, [Disability Employment Services](#). Department of Social Services.
- 234 Disabled People's Organisations Australia (DPOA) [Factsheet: Employment of Persons with Disability](#). DPOA, Sydney.
- 235 The Committee on Economic, Social and Cultural Rights has specifically addressed segregated employment of people with disability, and clarified that segregated employment and wage discrimination is in contravention of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- 236 The scheme was established by the Australian Government following the Federal Court finding in December 2012 that the BSWAT indirectly discriminated against two Australian Disability Enterprises (ADEs) employees with an intellectual disability. See: The [Business Services Wage Assessment Tool \(BSWAT\) Payment Scheme](#).
- 237 Who met a range of criteria and whose wages were assessed and paid using the BSWAT between 2004 and 2014. See: The [Business Services Wage Assessment Tool \(BSWAT\) Payment Scheme](#).
- 238 The [Supported Wage System](#) is a process that allows employers to pay a productivity-based wage for people with disability that matches an independently assessed productivity rate.
- 239 Productivity Commission (July 2018) National Disability Agreement Review, [Issues Paper](#).
- 240 Working-age women with disability who are in the labour force have lower incomes from employment; are more concentrated than other women and men in precarious, informal, subsistence and vulnerable employment, and are much more likely to be in lower paid jobs than men with disability. See: Women with Disabilities Australia (WWDA), (2014) ['Gender Blind, Gender Neutral': The effectiveness of the National Disability Strategy in improving the lives of women and girls with disabilities](#). WWDA, Hobart, Tasmania, ISBN: 978-0-9585268-2-1.
- 241 Department of Social Services (DSS) [National Disability Strategy, Second Implementation Plan: Driving Action 2015–2018](#).
- 242 More than double the OECD average of 22%. See for eg: Price Waterhouse Coopers (PWC) (2011) [Disability expectations: Investing in a better life, a stronger Australia](#).
- 243 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 244 National CRPD Survey (2019) Findings.
- 245 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 245 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 247 Australian Government (2016) National Disability Strategy 2010-2020: Progress Report to COAG.
- 248 The Disability Support Pension (DSP) provides financial support to working age Australians who are permanently blind or have a permanent physical, intellectual or psychiatric impairment that prevents or limits their capacity to work. See: Australian National Audit Office (2016) [Qualifying for the Disability Support Pension](#). The Disability Support Pension (DSP) is inadequate to support people with disability and consequently leads to a lower standard of living, poverty, and the inability to realise other fundamental human rights. Changes to the DSP eligibility since 2013 have already left many people with disability struggling to survive on the Newstart or Youth Allowance, payments that are below the poverty line and in no way accounts for the additional costs associated with disability. Income support pensions have fallen significantly relative to average and minimum wages over the last two decades. See: Disabled People's Organisations Australia (DPOA)(2016) [Election Platform 2016: Building a Disability Inclusive Australia](#). See also: Australian NGO Coalition Submission (2017) [Review of Australia Fifth Periodic Report under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights](#).
- 249 See: Australian National Audit Office (2016) [Qualifying for the Disability Support Pension](#).
- 250 Disability Rights Now (2012) [CRPD Civil Society Report on Australia](#).
- 251 National Social Security Rights Network (Jan 02, 2017), [1-in-4 on Newstart has a significant disability](#).
- 252 Henriques-Gomes, L. (10 Apr 2019) [Record number of sick or disabled Newstart recipients as Coalition seeks savings](#). The Guardian.

- 253 Naujokas, N. (7 May 2019) [Ask a policy expert: why is it so hard to get on the disability support pension?](#) The Guardian.
- 254 The [Specialist Homelessness Services \(SHS\)](#) collection obtains information about people, adults and children, who seek assistance from specialist homelessness agencies.
- 255 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 256 See: Australia's 2nd Universal Periodic Review, [Joint NGO Submission on behalf of Australian NGO Coalition](#), March 2015.
- 257 Productivity Commission, [Report on Government Services 2019](#)
- 258 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 259 Australian Institute of Health and Welfare 2017. [Australia's welfare 2017](#). Australia's welfare series no. 13. AUS 214. Canberra: AIHW.
- 260 Productivity Commission, [Report on Government Services 2019](#); National CRPD Survey (2019) Findings.
- 261 Disability Rights Now (2012) [CRPD Civil Society Report on Australia](#).
- 262 Disability Rights Now (2012) [CRPD Civil Society Report on Australia](#).
- 263 As recommended in the CRPD/C/AUS/CO/1 [para.54] and also recommended in CEDAW/C/AUL/CO/5; CEDAW/C/AUS/CO/7; E/C.12/AUS/CO/4; CCPR/C/AUS/CO/5; CAT/C/AUS/Q/5.
- 264 As recommended in the CRPD/C/AUS/CO/1 [para.56]
- 265 Including a comprehensive data collection mechanism for children and young people with disability.
- 266 At the Universal Period Review [Australia] 2016, the Australian Government gave a voluntary commitment to "supporting the protection and promotion of human rights through its foreign aid programme by promoting prosperity, reducing poverty and enhancing stability. The delegation welcomed the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development and affirmed its commitment to advancing this agenda. The Government committed to applying its Development for All: 2015-2020 strategy to strengthen disability-inclusive development and its international Indigenous Peoples Strategy 2015-2019 to advance the interests of indigenous peoples in Australia and around the world." See: United Nations General Assembly, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Australia; 2016, UN Doc. No: A/HRC/31/14 [para 145].
- 267 Transforming our world: the [2030 Agenda for Sustainable Development](#). See also: [Sustainable Development Goals](#).
- 268 Department of Foreign Affairs and Trade (2105) [Development for All 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program](#).
- 269 Department of Foreign Affairs and Trade (2105) DFAT [Indigenous Peoples Strategy 2015-2019](#): A framework for action.
- 270 The Department of Social Services (DSS) and the Attorney-General's Department (AGD) have been designated as the 'joint focal point' within the Australian Government to coordinate implementation of the CRPD. However, operational responsibility for implementation of the CRPD through the National Disability Strategy 2010-2020 (NDS) rests with DSS, and appears to be confined to a disability policy responsibility.
- 271 Australian Government, [Universal Periodic Review monitoring](#). Attorney-General's Department, Canberra.